

RIT N°□□□: O-5894-2018

RUC N°□□: 18-4-0130393-2

MATERIA□□: NULIDAD DE DESPIDO, DESPIDO INJUSTIFICADO Y COBRO DE PRESTACIONES

DEMANDANTE□: RICARDO ARQUEROS VELIZ

DEMANDADO□□: FISCO DE CHILE- MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES (SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES)

Santiago, trece de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS, OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece **RICARDO ARQUEROS VELIZ**, domiciliado en avenida Vicuña Mackenna Oriente N° 6720, departamento 55B, comuna de La Florida, quien interpone demanda en juicio ordinario del trabajo en contra del **FISCO DE CHILE- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES)**, representado legalmente por María Eugenia Manaud Tapia, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, ambos domiciliados en Agustinas N° 1.687 comuna de Santiago, a fin de que se declare la existencia de una relación laboral entre las partes y se condene a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicio, recargo, feriado proporcional y lo enterado por cotizaciones de salud, además de las remuneraciones y demás prestaciones derivadas del contrato de trabajo entre la fecha del despido y la convalidación del mismo y cotizaciones previsionales, con reajustes, intereses y costas.

Señala que ingresó a prestar servicios bajo régimen de subordinación y dependencia el día 1 de mayo del año 2006 para cumplir funciones profesionales en dependencias de la demandada, la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, bajo "contrato a honorarios a suma alzada en la Subsecretaría de Transportes".

Añade que al inicio de su relación laboral con la Subsecretaría, en mayo de 2006, en específico en el programa denominado Transantiago, tuvo como jefe directo a don Raúl Barrientos, quien oficiaba de encargado de infraestructura del citado programa. Añade que él le daba instrucciones respecto de las labores que debía ejecutar



y los plazos que debía responder, así como reprimendas cuando las tareas que realizaba no se ajustaban a las expectativas de él o las autoridades.

Refiere que desde esa fecha se le asignó espacio físico en oficinas de Transantiago, un escritorio, un computador personal, y una cuenta de correo institucional para realizar sus tareas, y pasó a ser un representante de la Subsecretaría para efectos del programa Transantiago, asignándole la categoría de jefe de proyectos.

Señala que en su condición de trabajador de la Subsecretaría de Transportes se debió relacionar permanentemente con otras reparticiones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tales como, la Secretaría Regional Ministerial (SEREMÍ), Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA), Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT); así como con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) Metropolitano, Municipios, Metro S.A., empresas consultoras, empresas constructoras, comunidad en general, etc., ello, con el fin de promover los proyectos de infraestructura que favorecieran la operación del sistema de buses que se estaba implementando en Santiago.

Alega que la primera etapa, de los más de doce años de relación laboral, las realizó en dependencias ubicadas en Nueva York N° 33 piso 16, oficinas arrendadas por la Subsecretaría para que profesionales del programa Transantiago realizaran sus tareas.

Sostiene que a fines de 2009 hubo un traslado a las actuales dependencias del Directorio de Transporte Público Metropolitano -DTPM- (antes denominado Transantiago), a calle Moneda N° 975. Agrega que ahí nuevamente se le asignó un espacio de trabajo, una oficina individual en el piso 7, en esta ocasión.

Explica que en ese periodo siguió ejerciendo como jefe de proyectos y con la llegada de doña Loreto Wahr como gerente de Infraestructura, además de las labores antes señaladas tuvo un periodo de jefatura con profesionales asignados para cumplir labores de diseño vial, licitaciones de estudios y asesorías, y revisión de proyectos atinentes al sistema de transporte público de Santiago. Agrega que en este periodo doña Loreto Wahr Rivas, quien a su vez dependía del Director del DTPM, era su jefa y quien le daba las instrucciones de las labores a realizar y era a ella a quien debía reportar el avance de las tareas y proyectos que se le encomendaban.

Indica que esta condición de trabajo, vale decir, con espacio físico asignado, escritorio, correo institucional, dependencia y subordinación se mantuvo continuamente durante todo el periodo en que se desempeñó profesionalmente en la Subsecretaría de Transportes.



Refiere que en su última etapa, desde septiembre de 2016 hasta julio de 2018, en el cargo de Gerente de Infraestructura del DTPM, se le asignó una oficina individual y contó con apoyo de una secretaria para las gestiones propias del cargo y, asimismo, tuvo la responsabilidad de liderar a los profesionales de esta unidad. Agrega que su jefatura directa la ejercía el Director de Transporte Metropolitano, quien daba las instrucciones del quehacer de la institución y a quien debía reportar el desarrollo de sus labores. Añade que hasta marzo de 2018 el cargo de Director fue ejercido por don Guillermo Muñoz Senda, entre marzo de 2018 y junio de 2018 el Director (Subrogante) fue don Eduardo Castro Ibáñez, y en el mes de junio fue asumido por don Fernando Saka Herrén, quien finalmente toma la decisión de su desvinculación.

Manifiesta que el último contrato a honorarios por suma alzada celebrado con la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones se suscribió el día 28 de diciembre de 2017 para entrar a regir el 19 de enero de 2018 y cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre de 2018, sin embargo, fue informado verbalmente de su desvinculación el día 19 de junio de 2018, y se le señaló en aquella notificación que se había decidido su desvinculación por motivos presupuestarios, y que ésta se haría efectiva físicamente desde ese mismo día, vale decir, se debió retirar del Servicio inmediatamente y formalmente el día 17 de julio del año en curso, tras hacer uso de los días administrativos y feriados legales pendientes, que le pidieron que utilizara, llenando un formulario que le entregaron el 19 de junio y que devolvió firmado según lo que le instruyeron.

Explica que en los contratos que firmó con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Subsecretaría de Transportes), durante los más de doce años que trabajó en ese Servicio, representado por el Subsecretario de Transportes la relación laboral se pactó bajo una jornada conforme a lo establecido en las normas del Código de Trabajo, a realizarse en dependencias del Ministerio de Transportes, y dicha jornada horaria era controlada mediante un sistema de registro tecnológico, tanto a su entrada como a su salida. Agrega que ya sea en el registro electrónico o con libro de asistencia, muchas veces también trabajaba en terreno. Añade que solo para ilustrar tenía exigencia horaria y de cumplimiento de jornada, vale decir, cuando no podía asistir a trabajar debía justificar su inasistencia mediante una licencia médica (no obstante, no pagan sus cotizaciones de salud) y debía permanecer en el Servicio durante la jornada diaria, es decir, existía una obligación de permanencia. Dice que los contratos también establecían



que el incumplimiento injustificado del horario -cuando no se registraban las marcas en el reloj control- daba origen a descuentos en su ingreso.

Destaca que, en los antecedentes de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Transportes, se señalaba que estaba asimilado al grado 4° de la Escala Única de Sueldos, según documento que se acompañará.

Indica que para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo su última remuneración ascendió a \$ 4.752.720- (cuatro millones, setecientos cincuenta y dos mil, setecientos veinte pesos).

Sostiene que sus funciones como trabajador de la Subsecretaría de Transportes, al tenor de los denominados convenios de prestación de servicios a suma alzada suscritos entre los años 2006 y 2017, especialmente, según se señalaba en el último contrato, eran las siguientes:

a) ☐ Asumir la coordinación general de la Gerencia de Infraestructura de la Secretaria Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano durante el año 2018, formando equipos de trabajo, asignándoles el estudio y gestión de proyectos de infraestructura vial para el transporte público de pasajeros del Sistema, supervisando y orientando su trabajo de acuerdo a los lineamientos y objetivos generales dispuestos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y o la Secretaria Ejecutiva para la eficiente operación del sistema.

b) ☐ Participar en el proceso de diseño, planificación, desarrollo y gestión de proyectos de infraestructura pública para el Transantiago, entregando su asesoría desde el punto de vista vial, financiero y constructivo.

c) ☐ Elaborar y entregar propuestas que comprendan la introducción a un mejoramiento de paraderos, estaciones de transbordo, zonas pagas y corredores y otras obras de infraestructura menor.

d) ☐ Asumir una coordinación activa con otras entidades públicas con competencia en materia de transporte público de pasajeros e infraestructura pública con el objetivo de que los proyectos encabezados por la Secretaria Ejecutiva del DTPM se incorporen e interactúen en forma armónica con aquellos desarrollados por esas entidades.

e) ☐ Encabezar, dentro del DTPM, el monitoreo del estado de ejecución de los proyectos y obras que forman parte del plan maestro de infraestructura, generando reportes que den cuenta de su grado de cumplimiento durante el año 2018 y de potenciales inconvenientes para su desarrollo.



f)□Conducir el trabajo de la Gerencia de Infraestructura relacionado con el diseño, aplicación y seguimiento de variables y niveles de calidad cuantitativos y cualitativos, conforme a los cuales se mide y pondere el funcionamiento de la infraestructura de sistema de transporte de Santiago en sus aspectos operacionales.

Alega que conforme a ello, sus actividades y que corresponden a labores propias y permanentes del Servicio han sido:

La ejecución del Plan Maestro de Infraestructura de Transporte Público (PMITP), que es una labor fundamental para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ya que a través de él se implementa el mejoramiento y operación del sistema de transporte público de Santiago de Chile, denominado Transantiago.

Argumenta que para ese fin su función era articular y dirigir al equipo de Infraestructura del DTPM que contaba con 16 profesionales, mayoritariamente arquitectos e ingenieros, y que básicamente estaba dividido en dos grupos, uno orientado a los diseños de proyectos, y otro a la ejecución y mantención de la infraestructura, labor atribuida legalmente al Ministerio. Agrega que este Plan, se renueva cada de cinco años, y tiene su origen en la Ley N° 23.378, y para su ejecución se requiere de la concurrencia de las voluntades políticas de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones; Obras Públicas; Vivienda y Urbanismo; Desarrollo Social y Hacienda; así como de la Intendencia de Santiago. Agrega que dicho directorio de ministros, liderados por Transportes y Telecomunicaciones, operaba a través de una secretaría ejecutiva, de cuyo director tenía dependencia su cargo. Añade que mediante este plan se atendía distintos elementos de infraestructura, tales como Paradas, Vías Prioritarias, Corredores de Buses y Estaciones Intermodales, a través de una diversidad de contratos de estudios y obras.

Señala que los estudios tenían por objetivo determinar nuevos proyectos a ejecutar, así como a definir estándares de soluciones para los elementos antes señalados. Agrega que en tanto las obras estaban relacionadas con implementación de nueva infraestructura, así como la mantención de la existente. Añade que la ejecución podía ser realizada a través de contratos de responsabilidad directa del DTPM, generalmente obras menores, así como por unidades ejecutoras externas {SERVIU principalmente} que eran mandatadas por DTPM para que se hiciesen cargo de los contratos de obras de obras de mayor complejidad. Para lograr estos objetivos el equipo desarrollaba bases de licitación {de estudios y obras}, ejercía como contraparte técnica e inspectores de obras, ya sea en obras propias como mandatadas. Añade que asimismo, se prestaba apoyo



técnico a otras reparticiones del Estado que necesitasen opinión del impacto de sus proyectos sobre la operación de la ciudad y, en particular, del transporte público. Indica que para dar contexto al despliegue del equipo, le correspondía abrir y mantener espacios de conversación y trabajo con otros actores relevantes del sistema que tienen incidencia en la plataforma vial urbana. Agrega que con ellos se buscaba consensuar soluciones técnicas y/o políticas respecto de las inversiones que el DTPM tenía como objetivo, basado en el plan ya señalado, ejecutar en distintas comunas donde funciona el Transantiago. Sostiene que los montos de inversión en infraestructura dependían de la Ley de Presupuestos anual, y en el periodo de su desempeño fluctuaron entre los 70 y 40 mil millones de pesos.

Expone que los proyectos más relevantes del último periodo, realizados por el equipo que él integraba fueron los siguientes:

- ☐ Eje de movilidad Vicuña Mackenna, en La Florida, Macul, San Joaquín, Ñuñoa y Santiago.
- ☐ Eje de movilidad Rinconada de Maipú.
- ☐ Eje de movilidad Dorsal en Recoleta.
- ☐ Eje de movilidad Independencia, en independencia y Conchalí.
- ☐ Plan Centro, Santiago.
- ☐ Plan de mantenimiento de puntos de paradas en 10 comunas.

Alega que como se puede observar sus labores como trabajador dependiente, corresponden a una misión permanente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, como es el funcionamiento y mejoramiento del Transantiago y para efectos de acreditar que se trata de una labor de este carácter se acompañaran documentos públicos que lo acreditan.

Manifiesta que en este sentido, es imperioso indicar que sus funciones se refieren a una sistematicidad continua y no a labores prestadas ocasionalmente, cumpliéndose todas ellas durante su jornada laboral en dependencias de la demandada y bajo la subordinación y dependencia. Añade que en efecto, algunas de sus jefaturas directas fueron: Raúl Barrientos, Loreto Wahr, y Guillermo Muñoz, prueba de lo anterior es la gran cantidad de años en que prestó labores continuas en el mismo órgano público, si hubiesen sido labores esporádicas u ocasionales estas habrían durado meses o un año y no doce, como en su caso.

Añade que a ello se agrega que siempre fue catalogado como trabajador y luego, como Gerente, con personal bajo su dependencia, haciéndose plenamente aplicable lo



que dispone el artículo 8 y 9 del Estatuto Laboral y develándose, por tanto, una práctica normalizada y tolerada por el Estado que refiere a las más graves violaciones a la normativa laboral, existiendo una precarización de los trabajadores, simulándose una sistematicidad de contratos a honorarios cuya esencia radica en la prestación de servicios específicos y transitorios, lo que no ocurre en el caso de marras, tal como se acreditará en la etapa procesal correspondiente.

Explica que la antigüedad de la relación laboral, por su parte, está acreditada en el certificado antigüedad N° 6269, de 5 de julio de 2018, que señala: "El Encargado de la Unidad de Personal de la Subsecretaría de Transportes, certifica Que el Sr. Ricardo Antonio Arqueros Veliz, cédula nacional de identidad N612.405.356-0, profesional, en la actualidad es funcionario de esta entidad, y actualmente desempeña funciones en el programa Directorio Transporte de Santiago RUT: 61.959.700-1 en calidad de honorario, a partir del 1 de mayo de 2006 a la fecha".

Sostiene que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al igual que otras dependencias de la Administración Pública, mantiene a centenares de empleados desarrollando funciones bajo la figura de "planta", "contrata" y "a honorarios". Los primeros son funcionarios de carácter permanente prestando servicios casi en idénticas condiciones que un trabajador regido por el Código del Trabajo, asimismo, se encuentran quienes prestan servicios bajo la figura legal de la "contrata" y finalmente quienes prestan servicios bajo el régimen de "honorarios", siendo estos últimos los trabajadores más precarizados del Estado.

Argumenta que son cientos los trabajadores que desarrollan funciones bajo subordinación y dependencia bajo la figura de un contrato de honorarios mediante la cual ha torcido su elemento esencial y formal, constituyéndose en un verdadero fraude a la ley que, en efecto, malamente admite, como en su caso, el desempeño de funciones habituales y permanentes durante doce años en dependencias de la demandada, imponiéndosele obligaciones tales como cumplimiento de jornada laboral, justificación de ausencias mediante licencias médicas, solicitud de permisos cuando debía asistir trámites personales, permanencia en el servicio, cumplimiento de metas, entre muchas otras obligaciones propiamente laborales. Añade que por ello, si bien en el plano meramente formal se celebró un acto denominado "contrato de honorarios" o "convenio de prestación de servicios", la intención y finalidad real de la Subsecretaría (Ministerio) de Transportes y Telecomunicaciones era disponer de los servicios de un trabajador a



jornada completa y con todas las obligaciones intrínsecas a tal calidad y en su caso, además, en el último periodo ejerciendo una jefatura.

Indica que en tales condiciones de precariedad laboral, le fue comunicado verbalmente que estaba despedido, y que esta desvinculación se haría efectiva formalmente una vez hiciera uso de los días administrativos y feriados legales pendientes, lo que correspondió al día 17 de julio de 2018. Agrega que en dicha oportunidad se le señaló que las necesidades de ahorro presupuestario eran la causa de su desvinculación.

Refiere que posteriormente, se dictó el Decreto Exento RA N°288/586/2018, del 25 de junio de 2018, que establece término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada. Agrega que en dicho documento se señalaba como fundamento del término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada que: "/.../mediante el informe de solicitud de desvinculación, de 11 de junio de 2018, de don Fernando Saka Herrán, actual Director de Transporte Público Metropolitano y supervisor del contrato de don Ricardo Arqueros Veliz, se da cuenta de la propuesta de poner término anticipado al contrato de prestación de servicios señalado en el considerando 1, por razones de servicio. Lo anterior se funda en que se encuentra en pleno desarrollo una política fiscal con acento en la austeridad del gasto público, lo que se traduce en la implementación de medidas al interior de cada servicio, de manera de limitar o restringir gastos en materia de personal, se agrega que producida la asunción del Subsecretario de Transportes, en marzo de 2018, se ha comenzado un proceso de optimización de los procesos internos, donde se incluye al Directorio de Transporte Público Metropolitano DTPM. Las necesidades del servicio se enmarcan, como señala en el informe, en una mayor eficiencia en el gasto en materia de personal que involucra un análisis crítico de la estructura, las funciones, los funcionarios y el personal contratado a honorarios en las diversas unidades, áreas y equipos de la estructura organizacional vigente, con el propósito de cumplir con los principios de eficiencia y eficacia de la Administración del Estado /.../ Añade que en razón de ello, agregan en el siguiente párrafo de la Resolución, se eliminará una de las dos Gerencias, por tener según su criterio funciones similares.

Razona que respecto al fundamento argüido en el señalado Decreto Exento RA N°288/586/2018, acerca del término anticipado de sus labores se permite indicar que es impreciso que las gerencias de Infraestructura y de Planificación y Desarrollo realizan trabajos similares o idénticos, ambas abocadas a la planificación y desarrollo del



sistema de transporte público metropolitano, según se le hace ver en el decreto de "término anticipado de contrato".

Dice que lo anterior da cuenta que las razones que se argumentaron para justificar su desvinculación no son válidas, debido a que:

1.- El organigrama del DTPM consideraba a ambas unidades de manera independientes, con diversos nombres desde el origen del sistema Transantiago, sus denominaciones como "gerencias" proviene desde la primera administración del Presidente Piñera.

2.- Cada gerencia tenía labores de distinta índole y alcance, así, por ejemplo, la de Planificación y Desarrollo se encargaba de proponer e implementar ajustes o modificaciones a las rutas de los servicios de buses del sistema de transportes, en tanto la de Infraestructura estaba encargada de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de Transporte Público en las comunas donde opera el sistema Transantiago.

3.- De ser efectiva la afirmación que ambas gerencias realizaban tareas similares, y que efectivamente se buscaba mayor eficiencia en los gastos de personal, el equipo de la gerencia debería haber sido finiquitado completamente de sus funciones, al contrario, el equipo de profesionales de la gerencia de Infraestructura permanece mayoritariamente en sus mismas labores, aunque al interior de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.

Señala que su despido no tiene relación realmente con los motivos argüidos, pues se están realizando por estos días numerosos despidos por parte de la nueva Administración, con una serie de argumentos que están siendo usados en todas las reparticiones públicas y que pretenden dar un carácter técnico a los despidos cuando en realidad se trata de una desvinculación por causa de no existir confianza política hacia los trabajadores.

Alega que a este respecto, se acompañaran diversas sentencias recaídas en recursos de protección en que el actual Gobierno hizo presente iguales razones que en nuestro caso para desvincular funcionarios esto es que se encuentra en "pleno desarrollo una política fiscal con acento en la austeridad del gasto público, lo que se traduce en la implementación de medidas al interior de cada servicio de manera de limitar o restringir gastos en materia de personal", y esas desvinculaciones ha sido declaradas ilegales por la Excelentísima Corte Suprema por desviación de fin.



Manifiesta que asimismo, hace presente que durante el largo periodo que trabajó en el Ministerio de Transportes no se le pagaron las cotizaciones previsionales y de seguridad social ni menos las indemnizaciones correspondientes a todos los años en que presté servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia. Añade que conforme a la prueba que rendirá en la oportunidad procesal correspondiente, la demandada se encuentra en mora desde el momento inmediatamente posterior al acto de contratación puesto que, como hemos señalado, jamás enteró cotizaciones y para los efectos de dar cumplimiento con el artículo 446 del Código del Trabajo vengo en señalar que me encuentro afiliado a AFP Modelo y a la Isapre Colmena.

Finalmente hace presente las normas legales que sustentan su pretensión.

SEGUNDO: Que la demandada interpuso excepción de prescripción extintiva de dos años prevista en el artículo 510 inciso primero del Código del Trabajo, de la acción de declaración de relación laboral, la que por encontrarse prescrita deberá ser desestimada.

Indica que la parte demandante sostiene que su relación con la demandada se extendió entre el día 1 de mayo de 2006 y 17 de julio de 2018, por lo que solicita que se declare la existencia de un contrato de trabajo a partir de dicha fecha y hasta esta época.

Alega que controvierte las afirmaciones del demandante, pues se reconoce un vínculo a honorarios desde el año 2006, en ese sentido, el tribunal podrá advertir, el inicio de la vinculación a honorarios entre el actor y ella corresponde al mes de mayo de 2006, por lo tanto en cualquier caso toda declaración de relación de tipo laboral debió solicitarse en esa fecha o dentro de los dos años siguientes a su inicio, más aun cuando anualmente se suscribían nuevos contratos a honorarios, con funciones que no eran iguales a las de periodos anteriores.

Sostiene que respecto de las prestaciones solicitadas desde más allá de dos años contados hacia atrás ha transcurrido el plazo de prescripción, agrega que lo anterior no puede ser entendido de otra manera, puesto que, si el actor consideraba que su vinculación con su parte no correspondía a una relación de servicios a honorarios, sino que se trataba de una de tipo laboral, debió alegar dicha circunstancia dentro del término que señala la ley, tomando en especial consideración que no se ha invocado ninguna circunstancia que pudiese haber suspendido el plazo que comenzó a correr desde la fecha antes indicada.

Indica que resolver de un modo diferente importaría reconocer una hipótesis de imprescriptibilidad de una acción judicial, imprescriptibilidad que para el caso de la



acción instaurada en autos no contempla nuestro sistema legal. Añade que el actor no invoca motivo alguno que explique la razón de por qué solicita recién en el año 2018 que se declare que entre las partes no ha mediado una relación a honorarios, sino que hubo una de naturaleza laboral, en circunstancias que su primer contrato a honorarios con esta parte data de mayo de 2006, sin haber reclamado o cuestionado la naturaleza de su contratación.

Manifiesta que en definitiva, si el demandante tenía dudas acerca de la naturaleza de los convenios de prestación de servicios para la demandada, debió solicitar a la justicia que las despejara en su momento. Agrega que dicho en otras palabras, si el demandante estimaba que su situación contractual era incierta -puesto que obedecía a una de tipo laboral y no a uno de naturaleza de honorarios- debió accionar dentro del término de dos años a partir del 1 de mayo de 2006, que corresponde a la data de su primer contrato a honorarios, por consiguiente, a la fecha de notificación de la demanda la acción para demandar la existencia de una relación laboral se encontraba prescrita, conforme al artículo 510, inciso primero, del Código del Trabajo.

Señala que en subsidio, siendo contratos con cometidos específicos diferentes, no es posible considerarlos como un todo, y deberían hacerse las distinciones en cuanto a agrupar los contratos a honorarios a sumaalzada conforme a los cometidos específicos que ellos incluían, y en tal caso, igualmente procede que el tribunal declare la prescripción en relación con grupos de contratos a honorarios, que hayan excedido del plazo legal.

Añade que conforme a la pretensión de la demandante, el contrato a honorarios de 2006 que finalizó por vencimiento del plazo el 31 de diciembre de 2006, puede hoy, doce años después ser declarado contrato de trabajo, cuando ese contrato se encuentra terminado y ejecutado. Lo mismo ocurre con cada uno de los contratos sucesivos de honorarios.

TERCERO: Que la parte demandada evacuando el traslado que le fuera conferido solicita el rechazo de la demanda de autos, con costas.

Fundando lo anterior señala que controvierte:

1. - Que entre las partes hubiese existido una relación laboral basada en un contrato de trabajo y regida por el Código Laboral y, por ende, la existencia de un presunto despido injustificado y la procedencia de las indemnizaciones y prestaciones que se reclaman.

2. - Que la cesación de los servicios específicos se haya producido por despido y



que este haya sido "injustificado" como pretende el demandante.

3.- Que la resolución que puso término anticipado al contrato a honorarios a suma alzada, sea carente de fundamentos o que estos sean inválidos, como pretende la demandante.

4.- La existencia todos y cada uno de los "supuestos indicios de laboralidad" indicados en la demanda, toda vez que, y a contrario sensu, el Ministerio en la contratación del demandante ha dado estricto cumplimiento al artículo 11 de la Ley 18.834, ya que el demandante fue contratado precisamente para prestar servicios específicos en dicha institución, de que da cuenta su contrato a honorarios a suma alzada.

5.- La naturaleza y monto de las remuneraciones que señala el demandante.

6.- Que sean procedentes y por tanto que se adeuden al demandante los conceptos y prestaciones reclamados en la demanda, como asimismo el monto reclamado, tales como indemnización por años de servicio, el recargo sobre esta última, mes de aviso y cotizaciones previsionales.

Agrega que niega además que al actor se le deban feriados, ya que hizo uso de los descansos pactados en su contrato de honorarios.

7.- Que el Fisco de Chile se haya encontrado en la posibilidad cierta de poder pagar las prestaciones demandadas, conforme a la legislación vigente.

8.- La procedencia del pago de cotizaciones previsionales, dado que no existe título que faculte a la administración centralizada del Estado que coloque a esta última en la obligación de pagar.

Añade que con todo niega que exista deuda de cotizaciones de seguridad social.

9.- Procedencia de la sanción de nulidad del despido, que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, conocida como "Ley Bustos", dada la ya señalada ausencia de título que habilite a la administración centralizada del Estado para pagar.

10.- Que el tribunal de sea competente para conocer de esta demanda en su totalidad, o a lo menos de la indemnización por una supuesta deuda en relación con el pago de las cotizaciones de salud,

Explica que debido a lo anterior no procede la acción ni las prestaciones reclamadas en el libelo, debiendo ser rechazado en todas sus partes con costas.

Razona que esta relación contractual entre el demandante y la demandada se enmarca en las hipótesis contempladas en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, y que faculta a la Autoridad para contratar en base a honorarios a para desempeñar



cometidos específicos.

Sostiene que dentro de este marco, el demandante se encargaba de cometidos específicos determinados por los propios contratos a honorarios. Agrega que por lo anterior, entiende que no es plausible considerar que su relación era de aquellas reguladas por el Código del Trabajo, sino que se trata de un genuino contrato de honorarios, expresamente autorizado por el artículo 11 recién citado.

Dice que en el caso de marras, según se acreditara en juicio, ese elemento no existe, toda vez que:

1.- En el lapso de cumplimiento de servicios el actor no estaba sujeto a instrucciones directas y permanentes de un superior inmediato, toda vez que el demandante era conocedora de su área, con discreción en la toma de decisiones; en tal sentido la existencia de un Jefe de Unidad en nada contradice con la tesis fiscal.

2.- En el caso de marras no hay rasgos materiales ni funcionales que permitan la construcción de los elementos para tener por acreditado el vínculo de subordinación y dependencia, toda vez que el actor no era evaluado en el ejercicio de sus funciones, así como tampoco participaba de un marco disciplinario específico; en este mismo sentido, el hecho de que el profesional deba emitir un informe, es una prueba respecto a la falta de poder de dirección y subordinación en sus labores y denota libertad en la ejecución, ya que si existiera una supervisión constante dicho informe no sería requerido. Agrega que en este punto, además el tribunal debe considerar que el demandante realizaba funciones gerenciales, lo que deja fuera la posibilidad y las alegaciones en orden a que estaba sujeto a instrucciones. Añade que también olvida el demandante que se encontraba en calidad de agente público.

3.-En el contrato a honorarios del actor se establecen beneficios indicados en las libelo pretensor, los cuales deben entenderse dentro del marco regulatorio que rige a las partes como es el contrato de honorarios pactado con los profesionales, lo que por lo demás, siempre se establece en beneficio para las partes, pero que en ningún caso puede significar la mutación de un contrato de honorarios en un contrato de carácter laboral.

Señala que como corolario de lo anterior:

Expresa que resulta que ambas partes estaban de acuerdo con el momento de suscribir el contrato que se trataba de un trabajador independiente, no de un trabajador sujeto a contrato de trabajo y ambas partes estaban de acuerdo que el pago de las cotizaciones previsionales sería de cargo del demandante, situación que es propia de los contratos a honorarios a suma alzada y no de los contratos de trabajo.



Refiere que de lo anterior se desprende que los contratos a honorarios que regularon los servicios del demandante tenían el carácter de especiales y particulares, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 11 "cometidos específicos", esto es, preestablecidos o determinados, y no excluyentes.

Argumenta que en el contexto de la relación contractual que existió entre el demandante y ella, el actor nunca recibió una "remuneración" tal como se concibe en nuestra legislación laboral, sino que sus ingresos correspondieron al honorario que se pactó al iniciarse la prestación de servicios, que, como se señaló, corresponde a una determinada suma alzada, tal como consta en las respectivas cláusulas de los Convenios suscritos entre las partes.

Sostiene que en conclusión y según lo expresado precedentemente, durante todo el tiempo de duración del contrato de prestación de servicios, se hicieron aplicables para el demandante, las normas de la Ley N°18.834, por expresa aplicación del contrato de prestación de servicios. Agrega que en efecto, en los contratos ad-referéndum sobre la base de honorarios a suma alzada celebrados entre las partes, en uso de las facultades que le confiere el artículo 11 del Estatuto Administrativo, se estableció con toda precisión lo siguiente:

- 1.- Que se trata de un contrato a honorarios a suma alzada.
- 2.- La finalidad del contrato.
- 3.- Los cometidos específicos a realizar por el demandante.
- 4.- La declaración que los servicios se contrataban sobre la base de honorarios a suma alzada, pagaderos previa presentación de boletas de honorarios en tantas cuotas como señala cada convenio.
- 5.- El plazo de duración de los servicios.

Manifiesta que en definitiva, el demandante, ha desconocido la naturaleza misma de los principios que informaron su relación con el Estado, por cuanto nunca existió el vínculo de subordinación y dependencia que pretende, el que no es aplicable a las relaciones entre el Estado y su personal, en razón que dichas relaciones se encuentran sujetas a las disposiciones del Estatuto Administrativo que hace inaplicables las normas laborales.

Añade que así, ninguna de las circunstancias detalladas hace aplicable a su situación el artículo 7° del Código del Trabajo ni otras normas de este texto legal, por cuanto esas condiciones pueden pactarse en un contrato remunerado con honorarios, a cuyas reglas se remite explícitamente el referido inciso final del artículo 4° de la Ley N°



18.883, al definir el sistema jurídico propio de las personas contratadas a honorarios y que es asimilable más al arrendamiento de servicios profesionales regido por el derecho común, antes que al contrato de trabajo propio del Código laboral. En otras palabras, el vínculo contractual se rige por las reglas que establezca el respectivo contrato de honorarios en conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Dice que cabe advertir que la Ley N°18.834, sobre Estatuto administrativo contiene una norma similar al artículo 4° citado en la sentencia transcrita, el artículo 11, ya citado, que permite contratar a honorarios para trabajos específicos o accidentes, como ocurre en la especie.

Advierte que tanto la jurisprudencia administrativa, como la del máximo Tribunal de justicia, concuerdan en que los convenios a honorarios suscritos entre Entidades públicas y terceros al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 18.834, aunque se hayan desarrollado con las obligaciones de cumplir un horario o sometido al cumplimiento de instrucciones, no se encuentran regulados por el Código del Trabajo, por no constituir una relación laboral, y en consecuencia no resulta procedente la demanda, la que en consecuencia debe rechazarse, con costas.

Alega que la teoría de los actos propios se fundamenta en la buena fe que debe existir entre las partes de toda relación contractual, dentro de la cual se incluye, naturalmente, la prestación a honorarios objeto de esta litis.

Destaca que sin duda, la contraria vulnera un claro principio general del derecho; la interdicción del “venire contra factum proprium non valef, o doctrina de los actos propios que proclama la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos, que como bien se sabe, constituye un límite al ejercicio de los derechos subjetivos, como expresión de la buena fe. Añade que en virtud del principio en comento, la contraria “debe mantener un estándar de coherencia con su comportamiento (...) no puede hacer valer unas pretensiones que resulten contrarias al sentido objetivo de su comportamiento anterior” (Luis Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, I, Introducción, Teoría del Contrato, Editorial Civitas, 2009, p. 63)

Hace presente que finalmente, el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho y ese acto contradictorio provoca la inadmisibilidad de la pretensión cuando el sujeto pasivo ha modificado su situación por la confianza que ha despertado en él la conducta vinculante.

Explica que en este sentido, la legislación laboral no puede considerarse aislada



del ordenamiento jurídico general, ni menos, el principio de buena fe. Agrega que en consecuencia, el juez laboral no puede desatender la voluntad de las partes que han decidido libremente no vincularse laboralmente.

Razona que en virtud de lo anterior, y según lo expuesto en la presente contestación, el demandante celebró diversos contratos de prestación de servicios a honorarios con la Subsecretaría, sin jamás manifestar de forma alguna su disconformidad con esa forma de contratación y de ello se desprende su voluntad definida y persistente de mantener en el tiempo el mismo tipo de vinculación, sumado a su pasividad y silencio en orden a ejercer algún tipo de reclamo, situación que se extendió por varios meses, suscitando confianza en su contraparte y cuestionándose sólo al momento de terminar la relación con la Subsecretaría demandada en autos. Añade que dicho comportamiento deja en evidencia un atentado a la buena fe.

Señala que por lo anterior, se afirma con rotundo acento que nadie puede aprovecharse de su propia conducta, erosionando principios básicos de equidad al intentar borrar y desconocer unilateralmente después de años lo que se ha desarrollado y aceptado por largo tiempo, recibiendo los correspondientes e importantes beneficios por ello, ya que en ninguna parte del libelo de demanda se aduce a que durante el tiempo que se mantuvo vigente la relación civil entre las partes no se le hayan pagado oportunamente las prestaciones de carácter económico a las que tenía derecho, resultando además un hecho cierto e indiscutido que durante todo el lapso de tiempo se extendieron las correspondientes boletas de honorarios. Agrega que en estos casos, la extensión de dichas boletas importa un claro indicio de aceptación, reiterada y mantenida en el tiempo, de las condiciones de contratación.

Añade que en el caso de autos, no puede el demandante pretender que podría verse en la indefensión por el término del contrato a honorarios, ello por cuanto al ser funcionario a honorarios, asumió y aceptó la naturaleza jurídica del vínculo que lo ligaba con la institución a sabiendas de dicha naturaleza desde que se materializó la contratación a honorarios y, posteriormente, durante el tiempo en que ha servido en el respectivo cargo.

Refiere que en este punto el tribunal deberá también considerar que uno de los mecanismos de interpretación de los contratos radica en la aplicación práctica que de los mismos han hechos las partes, en la especie:

1. Se suscribieron contratos a honorarios.
2. El demandante emitió boletas porque así corresponde en contratos de



honorarios.

3. Al demandante se le retenía el 10% de impuesto que sólo corresponde a propósito de los contratos de honorarios.

4. El demandante informaba de sus gestiones permanentes y habitualmente con la regularidad que exigía el propio contrato de honorarios suscrito por las partes.

Explica que todas estas cuestiones son propias de un contrato a honorarios a suma alzada y no de un contrato de trabajo sujeto al Código del Trabajo.

Manifiesta que la aplicación del Código del Trabajo resulta, además, incompatible con la Legalidad Presupuestaria. Añade que no debe olvidarse que los órganos del Estado desempeñan sus funciones de acuerdo con lo que se denomina Legalidad Dual.

Indica que por una parte, están las normas que fijan qué es lo que el órgano debe hacer y cómo hacerlo (legalidad competencial) y, por la otra, están las normas que destinan los recursos financieros para llevar a cabo las funciones encomendadas (legalidad presupuestaria).

Sostiene que el juzgamiento del actuar del órgano nunca puede hacerse sin tener presente esta dualidad a que hacemos referencia. Agrega que para ello es preciso considerar y tener presente el artículo 4 inciso 2° y 9 inciso 3° del D.L. N° 1263 sobre Administración Financiera del Estado; en relación con los artículos 1° de las Leyes de Presupuesto para los años respectivos, en la partida y glosa correspondiente.

Refiere que el artículo 4° del D.L. N° 1263 establece y consagra el denominado principio de Legalidad del Gasto. Dicho artículo dispone: "Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del Sector Público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o institucional. Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del Sector Público".

Dice que lo anterior, significa que no puede haber erogación o gasto público sin habilitación legal previa (Ley Anual de Presupuestos) y que no se puede efectuar cualquier tipo de desembolso. Agrega que los únicos válidamente ejecutables son aquellos descritos en la tipología del clasificador presupuestario respectivo.

Advierte que también, debe tenerse presente el inciso 3° del artículo 9° del mismo D.L. N° 1263, con arreglo al cual: "En los presupuestos de los servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575 se deberán explicitar las dotaciones o autorizaciones máximas relativas a personal. Para estos efectos, las dotaciones máximas



de personal que se fijen incluirán al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad".

Destaca que el principio de Legalidad del Gasto es de tanta importancia y trascendencia, que el legislador incluso ha previsto un tipo Penal especial para el caso de infracción consciente y deliberada.

Indica que en lo que respecta específicamente al Ministerio de Transportes, no existía una disponibilidad presupuestaria por la Ley de Presupuestos del Sector Público, que faculta al ente público para suscribir convenios con personas naturales como Honorarios a Suma Alzada, con cargo a los cuales se podía contratar personal a honorarios, lo que sí existía eran fondos para cubrir los gastos de un programa específico como efectivamente lo reconoce el propio demandante.

Añade que la descripción que antecede se repite invariablemente en todas las leyes de presupuesto indicadas y, como se ve, en ninguna de ellas se autoriza o permite la contratación sobre la base de un contrato regido por el Código del Trabajo, lo que desde luego debe ser considerado y respetado, sin poder establecer, mediante sentencia, la existencia de un contrato de trabajo para el caso que nos ocupa, porque ello importaría dejar estas normas sin aplicación, estableciendo artificialmente que en el periodo sub-lite hubo una relación laboral que legalmente jamás pudo configurarse, obligándose a pagar indemnizaciones y prestaciones que se habrían devengado en ese mismo periodo, pese a que jurídicamente era imposible que aquello ocurriera, porque no existía norma que autorice la formación del pretendido vínculo laboral.

Razona que lo anterior determina que la contratación a honorarios o a contrata o en cualquier otra modalidad no responde a una decisión que el Jefe Superior del organismo pueda adoptar, sino que tiene que necesariamente ajustarse y ceñirse de manera estricta a las respectivas partidas aprobadas en la ley de presupuesto las cuales condicionan el monto total del recurso financiero que puede destinarse a cada una de las formas de contratación que, a su turno, las normas competenciales han definido.

Argumenta que los contratos honorarios suscritos entre el demandante y la Administración constituyeron un estatuto especial que, en las materias en ellos consagradas, rigió en forma íntegra las relaciones entre las partes, quienes conocían, querían y aceptaban dicho estatuto como el que reglaba completamente su vinculación.

Señala que durante el tiempo que el actor sirvió en la Administración su relación se rigió por convenios a honorarios a suma alzada, por lo que no le asistía al Fisco de



Chile, aparte de la retención y pago del impuesto respectivo, la obligación de retener y enterar cotización alguna de seguridad social y de salud en los organismos previsionales.

Expone que en lo relativo a este punto es importante tener presente lo señalado por la Contraloría General de la República en innumerables Dictámenes, según los cuales, los expertos contratados bajo base de honorarios, no invisten la calidad de funcionarios públicos y sus derechos y obligaciones son los establecidos en el respectivo contrato; no rigen a su respecto las disposiciones del Estatuto Administrativo ni las del Código del Trabajo, y por lo mismo, es resulta improcedente que el fisco haga pago de cotización de seguridad social alguna.

Hace presente que el pretender lo contrario, esto es, que al Fisco de Chile le correspondía el retener, declarar y pagar cotizaciones previsionales y de salud a las personas que se desempeñan bajo el vínculo a honorarios en la Administración del Estado, lleva aparejada una ilegalidad, violentando la supremacía Constitucional, contemplada en el artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 19.880. Dichas normas establecen que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella (para el caso concreto, el artículo 11 del Estatuto Administrativo y demás normas de Derecho Público Administrativo aplicables) y deben desarrollar sus funciones dentro de su competencia.

Dice que sobre el particular, y un mejor análisis, debemos partir por no olvidar que los órganos del Estado desempeñan sus funciones de acuerdo con lo que se denomina Legalidad Dual.

Expresa que por una parte, están las normas que fijan qué es lo que el órgano debe hacer y cómo hacerlo (legalidad competencial) y, por la otra, están las normas que destinan los recursos financieros para llevar a cabo las funciones encomendadas (legalidad presupuestaria).

Sostiene que el juzgamiento del actuar del órgano nunca puede hacerse sin tener presente esta dualidad a que hacemos referencia.

Alega que de esta manera, una sentencia en que se condene al Fisco al pago de cotizaciones, que no podría legalmente haber retenido ni pagado vulnera esa legalidad dual.

Agrega que esta transgresión es la que precisamente ocurre cuando se condena al Fisco al pago cotizaciones de seguridad social en los organismos previsionales respecto



de trabajadores que han presentado servicios a honorarios al amparo del artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Expresa que en efecto, en materia de administración de haberes públicos y como expresión del principio de legalidad, se debe observar el principio de legalidad del gasto público, luego si se dispone que el Fisco pague cotizaciones previsionales por un periodo en que no correspondía su entero por no existir relación laboral, y, por ende, no había norma que habilitaría a realizar dicho desembolso, se contravienen no solo las normas que rigen la legalidad competencial, sino que particularmente las normas sobre legalidad presupuestaria, contenidas el artículo 100 de la Constitución que dice:

"Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago." y la sentencia al hacerlo se infringiría lo señalado tanto el inciso 2° del artículo 4 y como en el inciso 3° del artículo 9, ambos del D.L. N° 1263 sobre Administración Financiera del Estado.

Añade que el artículo 4° del D.L. N° 1263 establece y consagra el denominado principio de Legalidad del Gasto, al disponer:

"Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del Sector Público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o institucional.

Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del Sector Público".

Indica que lo anterior, significa que no puede haber erogación o gasto público sin habilitación legal previa y que no se puede efectuar cualquier tipo de desembolso.

Sostiene que los únicos válidamente ejecutables son aquellos descritos en la tipología del clasificador presupuestario respectivo y que no se verifica respecto del pago de cotizaciones de seguridad social ni de salud para personas que laboran en la Administración bajo una prestación de servicios a honorarios y en este sentido, la sentencia que condene al Fisco al pago de cotizaciones previsionales respecto de una persona que prestaba servicios al Fisco, también transgrede lo señalado en el inciso 3° del artículo 9° del mismo D.L. N° 1263, que señala: "En los presupuestos de los servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575 se deberán explicitar las dotaciones o autorizaciones máximas relativas a personal. Para estos efectos, las



dotaciones máximas de personal que se fijen incluirán al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad".

Alega que de esta manera, mientras subsistió la relación bajo honorarios a suma alzada, el Fisco de Chile se encontraba fáctica y jurídicamente imposibilitado para cumplir con lo señalado en el artículo 58 del Código del Trabajo, que ordena al empleador deducir de las remuneraciones las cotizaciones de seguridad social.

Explica que durante la vigencia de la relación convencional con el actor carecía de un título para retener y pagar en las instituciones de seguridad social las cotizaciones que señala aquella norma, lo anterior lleva a concluir que sólo por norma legal expresa un servicio público puede contratar personal al amparo del derecho laboral común, y si se realizara ello, sin la existencia de una ley previa, se incurre en un ilícito penal y para el caso de marras, nunca existió norma que autorizare o permitiese la contratación sobre la base de un contrato regido por el Código del Trabajo, por lo que nunca existió obligación de entero de cotizaciones en los organismos de seguridad social.

Señala que antes de la presentación de la demanda que originó este juicio no se había siquiera cuestionado o discutido la existencia de una relación normada por el Código del Trabajo, y, por ende, no existía habilitación para el pago de cotizaciones previsionales.

Explica que en conclusión, no existe ni ha existido partida presupuestaria a la cual imputar una contratación bajo la forma de régimen contractual del trabajo, lo que permite reafirmar la improcedencia de la demanda.

Añade que es necesario señalar que en los contratos celebrados por el demandante fue contratado en conformidad a lo previsto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo y de acuerdo a lo autorizado por la Ley de Presupuestos del Sector Público, para prestar servicios como Agente Público.

Manifiesta que la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores ha fijado el alcance y las consecuencias jurídicas de esta calidad en sentencia de la Excm. Corte Suprema autos rol N° 37.203-2017.

Dice que según la sentencia, la calidad de "agente público" equivale a la de funcionario público, cuestión que, de alguna manera, impone un tratamiento diferente, respecto del contratado a honorarios sin dicha calidad. Agrega la posibilidad de contratar profesionales bajo esta modalidad deriva de la ley de presupuestos.

Añade que así, anualmente se aprueban para cada Servicio, los montos máximos



que se pueden emplear en honorarios; autorizando la ley de presupuestos, la contratación de personas naturales a honorarios a quienes se les otorga la calidad de agentes públicos.

Expone que agrega el fallo, que sobre la base de las funciones contractuales consignadas en el fundamento sexto de la sentencia, las prerrogativas contenidas en cada uno de los contratos y/o las resoluciones que aprueban dichas contrataciones, se enmarcan dentro de la normativa que rige a esta clase de prestadores de servicios, quienes, como contrapartida, tienen responsabilidad administrativa. De esta manera, el hecho de que el actor estuviera afecto a jornadas de trabajo de 44 horas, al deber de registrar su entrada, sujeción al poder de mando de sus superiores y el deber de obediencia en el desarrollo de sus funciones, está dentro del marco jurídico que rige la materia, es decir, los contratos celebrados entre las partes y la ley de presupuesto que habilita la contratación en calidad de agente público.

Agrega que conforme a la ley de presupuesto de cada año vigente durante la contratación del actor, el Servicio se adecuó al marco legal que el propio legislador le entregó, en cuanto a la contratación de personas naturales a honorarios a quienes se les otorga la calidad de agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico; adecuándose el desempeño de sus labores a dicha norma según se desprende de los contratos analizados y la testimonial rendida en juicio, siendo siempre contratado el actor con cargo a recursos asignados a un proyecto o programa específico; con derechos y obligaciones inherentes al hecho que sus decisiones eran vinculantes para el Servicio.

Refiere que el considerando décimo cuarto de la sentencia, señala, además, un interesante argumento: Indica que, conviene aquí destacar el voto disidente del abogado don Rodrigo Correa G, en los autos rol N° 36.770-2017, en recurso de unificación resuelto el 14 de mayo de 2018. El abogado sostiene que la ley 4.053, de 29 de septiembre de 1924, reguló por primera vez el contrato de trabajo y dispuso en su artículo primero que éste se regirá por las disposiciones de la presente ley con preferencia a las leyes generales. Hasta la entrada en vigencia de esta ley, la prestación de servicios bajo subordinación y dependencia se regía precisamente por las leyes generales, contenidas en las disposiciones del título XXVI del Libro IV del Código Civil, Del arrendamiento de servicios inmateriales.

Alega que en efecto, no es que el arrendamiento de servicios inmateriales excluya



el trabajo bajo subordinación y dependencia, es precisamente porque lo comprende, y porque sus disposiciones no protegen adecuadamente al trabajador, que se hizo necesario regular especialmente el trabajo bajo subordinación y dependencia, no es entonces en virtud de su naturaleza que el arrendamiento de servicios inmateriales no se aplique en general al trabajo bajo subordinación y dependencia; ello es resultado de una decisión legislativa soberana, hoy recogida en los artículos primero, séptimo y octavo del Código del Trabajo.

Indica que ella convive con otra especialísima decisión legislativa soberana: el Servicio de Vivienda y Urbanización puede contratar ingenieros bajo régimen de arrendamiento de servicios inmateriales, el cual no excluye la posibilidad de subordinación y dependencia, el disidente no expresa opinión sobre el mérito de esta decisión: le basta constatar que ella se encuentra vigente y que la sentencia recurrida se ajusta a ella.

Manifiesta que finaliza la sentencia indicando que, las funciones a desarrollar por el demandante, fueron expresamente establecidas en todos y cada uno de los contratos celebrados y las respectivas resoluciones aprobatorias y dichas labores, corresponden a cometidos específicos determinados, sean de naturaleza permanente o habitual y cumplan con la especificidad requerida, además, se ejecutan conforme a las normas que regulan la celebración de convenios en la Administración del Estado.

Explica que en este contexto, los distintos contratos establecieron las condiciones propias para las cuales el actor fue contratado, tales como fecha de vigencia del convenio y obligatoriedad de control de asistencia; honorarios acordados, forma de pago y periodicidad; emisión de boleta; pago contra presentación de informes; cometidos funcionales y comisiones de servicio, con derechos a pasajes y viáticos; derechos y beneficios pactados como feriado legal, licencias médicas, permisos especiales, permiso paternal, y maternal, sala cuna, capacitación; obligación de confidencialidad de acuerdo al estatuto administrativo; prohibición de utilizar material o información reservada o confidencial del organismo; aplicación de incompatibilidades administrativas de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado.

Agrega que asimismo, se le otorga la calidad de Agente Público de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que la tipifican en su artículo 19: "Los encargados de los programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la



responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico".

Dice que conforme a lo establecido antes en las respectivas motivaciones, se ha determinado en la sentencia que la relación que ligó a las partes no es de carácter laboral, lo dicho conduce necesariamente, al rechazo de la demanda declarativa de relación laboral, de despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones.

Sostiene que las consideraciones anteriores, son perfectamente aplicables al caso que en esta oportunidad nos ocupa, así como las consecuencias que de tal interpretación se derivan, debiendo por tanto rechazarse la demanda en todas y cada una de sus partes.

En subsidio de lo anteriormente señalado, y para el improbable evento que el tribunal considere que en el caso en estudio la situación fáctica en que el actor prestó servicios para el demandado no se ajustaba a los términos del artículo 11 del Estatuto Administrativo, expone se estaría en presencia de un acto ilegal de la administración cuya sanción sería la nulidad del contrato a honorarios, mas no su transformación en un contrato de trabajo.

Argumenta que nuestro ordenamiento jurídico no contempla como sanción para los actos de la Administración que no cumplan con los requisitos legales la transformación del acto en uno de distinta naturaleza.

Refiere que de modo que si se estableciera que las partes en la contratación del actor no se sometieron a las condiciones de accidentabilidad y no habitualidad de los servicios o de cometidos específicos que se contempla en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, lo que existiría sería un actuar no ajustado a derecho tornando ilegal el acto administrativo que aprobó el contrato, pero no cabría ni podría alterarse la calificación judicial del contrato a honorarios transformándolo en un contrato de trabajo.

Añade que si se estimara que este organismo no actuó conforme a derecho en la contratación del demandante no puede el tribunal generar otro acto jurídico distinto, puesto que no existe norma legal alguna que habilite a la conversión del convenio a honorarios regido por el Estatuto Administrativo en un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo o en otro acto de naturaleza jurídica diferente.

Expone que además, debe considerarse que aún de admitirse la conversión el acto ineficaz en el ámbito del derecho público sería necesario que ese acto se transformara en un acto eficaz o legal, sin embargo, debe recordarse que el ordenamiento jurídico no autoriza a la Administración a contratar personal bajo la modalidad de un contrato de trabajo regido por el código del ramo, salvo en situaciones excepcionales y autorizadas por ley que no corresponden a este caso, por consiguiente, no es factible que el tribunal,



a través del mecanismo como es la conversión del acto jurídico nulo se proceda a calificar ese acto como un contrato de trabajo, puesto que ello importaría generar un nuevo acto nulo, ya que nuestro sistema legal no contempla que la Administración pueda contratar personal bajo la figura de un contrato de trabajo, se esta manera, no resulta posible que una supuesta irregularidad se pretenda solucionar cometiendo una irregularidad de la misma entidad.

Razona que el demandante pretende que la existencia de sucesivos contratos a honorarios generara una legítima expectativa de relación contractual permanente y constante entre las partes, que asimila -erróneamente- a una relación contractual regida por el Código del Trabajo y tal entendimiento, es evidentemente equivocado.

Señala que a este respecto, la Contraloría General de la República, ha señalado en Dictamen N° 6400 de 2 de marzo de 2018, explícitamente que:

"El dictamen N° 22.766, de 2016, resolvió, en el ámbito municipal, que la recontractación reiterada de los funcionarios afectados, tornó en permanente y constante la mantención del vínculo de los mismos, lo que determinó, en definitiva, que los municipios involucrados incurrieran en una práctica administrativa que generó para los recurrentes una legítima expectativa que les indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación. (...) Sobre el particular, se debe anotar que el señalado dictamen arriba a las conclusiones reseñadas en el apartado I de estas instrucciones en relación con sucesivas designaciones a contrata, por lo que aquellas sólo aplican para ese tipo de vinculaciones -o contrataciones similares, aun cuando no tengan la misma denominación- y no para los contratos a honorarios." (destacado es nuestro).

Expone que en definitiva, la recontractación reiterada a honorarios no torna en permanente y constante la mantención del vínculo entre las partes contratantes, razón por la cual su término se rige indudablemente por sus propias cláusulas; en el caso de autos por vencimiento del plazo establecido en el propio Convenio de Honorarios.

Argumenta que la sanción de nulidad de despido prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo es inaplicable a los organismos públicos cuando la existencia de la relación laboral solo ha sido declarada en la sentencia, tanto porque va más allá del objetivo de la ley que instauró cuanto porque atenta contra el principio de legalidad del gasto que afecta a los organismos públicos.

Añade que el pago de las cotizaciones solicitadas es improcedente en casos que, como en la especie, se discute entre las partes la existencia de un vínculo normado por el Código del Trabajo.



Refiere que en estos casos, la existencia de una relación de naturaleza laboral nacería sólo con la sentencia que acoge una demanda de esa naturaleza, o al menos debería considerarse que el título surge con la dictación de ella, por lo que la obligación de enterar cotizaciones previsionales sólo podría exigirse a partir del inicio de la relación laboral ya declarada, jamás con anterioridad.

Indica que el único vínculo que existió durante el período que prestó sus servicios el demandante fueron diversos y consecutivos contratos de prestación de servicios de naturaleza civil, en el que, como contraprestación, se les pagaban honorarios, así, el actor, al recibir sus honorarios, emitía la respectiva boleta y esta parte procedía a la retención del 10% de la misma por concepto de PPM, de conformidad con la ley. Añade que por este motivo, la Subsecretaría jamás se encontró obligada al pago de cotizaciones previsionales, ya que no existió un vínculo de naturaleza laboral entre las partes, por lo que malamente podría encontrarse en mora de pagarlas.

Sostiene que en conclusión, la pretensión del demandante, en el sentido de que se le paguen las cotizaciones previsionales durante el período trabajado, no podrá ser acogida por el tribunal, ya que entre las partes no existió relación laboral, y el Fisco no se encontraba obligado a cancelar las cotizaciones previsionales.

Añade que a mayor abundamiento, la parte demandante elude que en virtud de la ley N° 20.255 y, partir del año 2012, todas las personas que prestan servicios bajo la modalidad de honorarios tienen la obligación personal (no traspasable a la persona o entidad a quien prestan sus servicios) de realizar cotizaciones previsionales para pensiones, seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de esta forma, están obligados a cotizar todas aquellas personas que:

- Perciban honorarios por actividades independientes; o
- Perciban rentas por Boletas de Honorarios; o
- Perciban rentas por Boletas de Prestación de Servicios de Terceros; o 0 Perciban rentas por Participaciones de Sociedad de Profesionales.

Manifiesta que a mayor abundamiento, la propia demandante contractualmente asumió el pago de las cotizaciones previsionales, por tanto, el no pago de las mismas, no le puede ser imputable, lo contrario implicaría desconocer abiertamente el principio de la autonomía de la voluntad y la ley del contrato, por lo demás, debe recordarse que, de acuerdo al art. 17 del D.L. N° 3500, el pago de las cotizaciones previsionales es de cargo del trabajador, correspondiéndole al empleador solo su retención y posterior entero en la institución previsional correspondiente, por lo que no es procedente que se



solicite que el demandado pague, a su costa, las imposiciones previsionales; pues en el presente caso es un hecho pacífico que nunca ha hecho retenciones de naturaleza previsional respecto del actor, pues ello es jurídicamente inadmisibles en un régimen de prestación de servicios a honorarios, en conclusión, la pretensión del demandante, en el sentido de que se les paguen las cotizaciones previsionales durante el período trabajado, no podrá ser acogida por el tribunal, ya que entre las partes no existió relación laboral, y el Organismo no se encontraba obligado a cancelar las cotizaciones previsionales.

Dice que pretender la aplicación de la denominada "Ley Bustos", como lo hace el demandante en esta demanda es improcedente atendido que del Mensaje Presidencial de la ley N°19.631 de 1999 se desprende que sólo se contempla la sanción de la denominada "Ley Bustos" para el empleador que habiendo retenido las cotizaciones previsionales no las entera en la entidad previsional correspondiente. Agrega que el Mensaje Presidencial, señaló que "el término del contrato no debe surtir sus plenos efectos jurídicos mientras el empleador se encuentre en mora en el pago de los compromisos previsionales relativo a los descuentos que para el efecto hizo al trabajador" y dicho Mensaje dice textualmente al respecto lo siguiente: "consiste en que el empleador, quien ha descontado de las remuneraciones de sus trabajadores las cotizaciones correspondientes, cumpla con la subsecuente obligación de pago, a la que la obliga la ley, antes de dar por terminada la relación de trabajo"; luego agrega "se estima, que pues, que el término del contrato no debe surtir sus plenos efectos jurídicos mientras el empleador se encuentre en mora en el pago de los compromisos previsionales relativo a los descuentos que para el efecto hizo al trabajador". Agrega que en consecuencia, la aplicación de esta norma en la forma solicitada por el demandante, esto es como una sanción, es presuponer una conducta de evasión, morosidad y contumaz de esta parte, cuestión que no ha acontecido en la especie, es decir, si bien el objetivo fue obtener el pago de las cotizaciones previsionales, el proyecto no tuvo en vista las situaciones relativas a los contratos honorarios en los que la existencia de la relación laboral se establece en la sentencia, sino solo aquellos casos en que la relación laboral no se discutía y las cotizaciones previsionales eran retenidas, pero no pagadas.

Sostiene que en conclusión, la pretensión de la parte demandante, en el sentido de que se aplique la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, durante el período en que ésta prestó sus servicios, no podrá ser acogida por el tribunal, ya que entre las partes no existió relación laboral, y la entidad demandada no se encontraba obligada a cancelar las cotizaciones previsionales.



Añade que aplicar la sanción a aquellos casos en que el litigante desconoce la existencia de la relación laboral, la que solo vino a ser reconocida en la sentencia, importa extender la finalidad de la norma más allá de la intención del legislador al obligar a un empleador -que de buena fe ha estimado que ni legal ni convencionalmente le corresponde- a efectuar un pago sin contar con los fondos para ello.

Argumenta que la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo se aplica solo a quien retuvo de los ingresos del trabajador los fondos necesarios para pagar las cotizaciones previsionales y no lo hizo, es decir no cumplió con su rol de agente intermediario y distrajo dichos dineros.

Alega que es una sanción que se aplica al empleador que al momento de la desvinculación del dependiente se encontraba en mora en el pago de las cotizaciones previsionales, cuyos montos descontó y retuvo de las remuneraciones respectivas sin enterarlos en los organismos pertinentes, no está prevista para aquella situación que se presenta cuando es una sentencia la que establece que las partes estaban vinculadas laboralmente.

Refiere que la procedencia de esta sanción de invalidez del despido debe determinarse a la luz de la finalidad que tuvo el legislador al instaurarla, que es precisamente estimular al empleador a enterar en los órganos respectivos las cotizaciones que retuvo, sin que sea necesaria la intervención de la autoridad administrativa o judicial, ergo, supone que esa obligación de retención es manifiesta para las partes.

Señala que por otra parte, la aplicación de la nulidad del despido infringe el principio de legalidad según el cual los organismos públicos no pueden efectuar gastos o pagos sin contar con la asignación presupuestaria correspondiente, en efecto, en materia de administración financiera del Estado, la legalidad del gasto público rige como principio rector y fundamental. Agrega que en estos términos, la actuación de los órganos de la Administración conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República (desde ahora CPR) y el artículo 2 de la Ley N° 18.575, no solo ofrecen un marco normativo que dirige la actuación de los funcionarios públicos, también consagran la sujeción de dichos funcionarios a la Constitución y las leyes en lo referente a la ejecución presupuestaria del Estado.

Manifiesta que la Contraloría General de la República en su dictamen N° 26.714, de fecha 11 de abril de 2016, concuerda con ello y caracteriza el carácter reglado de la ejecución del gasto fiscal al señalar que: "conforme al principio de "legalidad del gasto



público" contemplado en los artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución Política de la República, 2° y 5° de la ley N° 18.575, 56 de la ley N° 10.336 y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, los servicios públicos solo pueden efectuar aquellos desembolsos a que estén autorizados por la ley, de modo tal que los recursos asignados en sus presupuestos deben ser empleados con sujeción a las normas que regulan su inversión, destinándolos al desarrollo de las competencias que el ordenamiento jurídico les ha entregado."

Indica que bajo este desarrollo se ha consagrado el "Principio de Especialidad Presupuestaria", que se caracteriza porque los integrantes del Sector Público deben invertir los fondos puestos a su disposición en los objetivos y finalidades fijados en la Ley de Presupuestos. De este modo, de conformidad con el ordenamiento presupuestario, los servicios de la Administración del Estado solo pueden efectuar aquellos desembolsos que estén autorizados por la ley, de modo tal que los recursos asignados en sus respectivos presupuestos deben ser empleados con sujeción a las normas legales que regulan su inversión, destinándolos al cumplimiento y desarrollo de las funciones y actividades que el ordenamiento jurídico ha radicado en cada organismo.

Sostiene que en definitiva, y sin perjuicio de lo ya expuesto ut supra en orden a la inaplicabilidad de las normas del Código del Trabajo a las relaciones estatutarias que rigen a los funcionarios públicos, resulta indiscutible, que, en todo caso, tratándose de órganos de la Administración del Estado, no procede aplicar la sanción de nulidad del despido contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, como lo ha señalado ya reiteradamente la Corte Suprema.

Añade que a mayor abundamiento, el tribunal deberá considerar que, así como no existía título para el pago de las cotizaciones previsionales supuestamente adeudadas, en atención al principio de legalidad dual que hemos señalado, tampoco existe título para el pago de cotizaciones hacia lo futuro, atendido lo expuesto debe rechazarse la demanda, con costas, por ser improcedente y carente de causa la petición de la demanda por la que se solicita se condene a esta parte a pagar las indemnizaciones que deriven las indemnizaciones que deriven de la aplicación de los incisos 5 y 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, denominada "Ley Bustos".

Destaca que Ramón Meza Barros señala con relación al enriquecimiento sin causa que "a menudo una persona se enriquece en desmedro de otra; pero generalmente el incremento de un patrimonio, a costa del empobrecimiento de otro, opera por un justo motivo, por una causa legítima, como una venta, una donación, una asignación por causa de muerte. Pero suele este fenómeno producirse sin causa justificada, sin un



motivo valedero, como si una persona paga lo que realmente no debe. El que recibe el pago se enriquece a expensas del que lo efectúa, sin motivo plausible, injustamente"1, y por eso la teoría del enriquecimiento sin causa "tiene por objeto precisamente evitar que una persona se enriquezca a costa de otra si no puede justificar jurídicamente este enriquecimiento"2.

Señala que el enriquecimiento sin causa en materia de pago de cotizaciones previsionales por aplicación de la ley Bustos puede fundarse en las siguientes argumentaciones:

a) Por tratarse de sumas ya pagadas e incluidas en la remuneración pagada por los servicios prestados.

Expresa que CHACANA, llevando este principio o teoría al Derecho del Trabajo y específicamente haciendo referencia a la sanción establecida en el artículo 162 del Código del ramo tratándose de una persona que presta servicios a honorarios, sostiene que ésta sería improcedente ya que "en una relación regida en virtud de un contrato a honorarios, el prestador de servicios recibe un estipendio íntegro que no sufre descuento alguno precisamente por no encontrarse regido por las normas laborales. Agrega que si esta relación estuviera regida por un contrato de trabajo, tales emolumentos serían menores debido a que en este tipo de relaciones el empleador se ve obligado a realizar los descuentos previsionales que son de cargo del trabajador, sin nombrar los descuentos de carácter tributario. Añade que de esta forma, condenar al empleador a pagar cotizaciones previsionales supuestamente devengadas durante el tiempo en que el trabajador prestó servicios a honorarios sería ordenar un pago doble y sin razón jurídica alguna, debido a que el monto de tales cotizaciones estaría incluido en las remuneraciones íntegras ya pagadas al trabajador, solo que no fueron retenidos por el empleador"

b) Por aplicación de la sanción establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo específicamente en relación con el pago de las cotizaciones de salud pasadas.

a.- Normativa aplicable al contrato de salud previsional.

Expresa que el contrato de salud está regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005, del Ministerio de Salud, en la Circular IF/N°12 de la Superintendencia de Salud, de fecha de 20 de enero de 2006, que "Imparte instrucciones sobre condiciones generales uniformes para los contratos de salud previsional", y otras circulares emitidas por la Superintendencia de Salud.

Dice que las Instituciones de Salud tienen por objeto exclusivo el financiamiento



de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, como lo indica el artículo 173 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005, del Ministerio de Salud . Así, en los contratos de salud, deberán señalarse expresamente las prestaciones y beneficios mínimos que la Isapre deberá otorgar a sus afiliados y beneficiarios, a que se refieren el artículo 189 inciso segundo letra a), artículo 190 inciso primero y artículo 194 del DFL N°1.

Razona que por otra parte, se establece como obligación para el cotizante declarar y pagar en forma íntegra y oportuna el precio del Plan de Salud Complementario pactado y el precio de los beneficios que conforman la cotización, tratándose de un afiliado independiente, cotizante voluntario, imponente voluntario o cesante.

Añade que así, respecto del contrato de prestaciones médicas, el cual, dentro de las Condiciones Generales, aprobadas por la Superintendencia de Salud en conformidad al artículo 4° del D.F.L. N°1, es común para todas las Instituciones de Salud Previsional, se establece en el artículo 33 del DFL N°1, que será de carácter indefinido, sólo pudiendo poner término por incumplimiento de obligaciones contractuales o de mutuo acuerdo según el artículo 38 de esa normativa. Agrega que de esta forma, será motivo suficiente para que la Institución de Salud ponga término, según lo establecido en su artículo 202, el no pago de cotizaciones por parte de los cotizantes voluntarios e independientes, tanto aquellos que revistan tal calidad al afiliarse como los que la adquieran posteriormente por un cambio en su situación laboral y previo al ejercicio de esta facultad, la Isapre deberá haber comunicado al afectado del no pago de la cotización y de sus posibles consecuencias, dentro de los tres meses siguientes contados desde aquel en que no se haya pagado la cotización como se establece en el artículo 197 del DFL.

Indica que respecto al pago de la cotización de salud del afiliado, esta deberá ser declarada y pagada por el empleador, entidad encargada del pago de la pensión, trabajador independiente o imponente voluntario, según sea el caso, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a aquel en que se hayan devengado las remuneraciones, pensiones y rentas correspondientes. Agrega que el pago deberá efectuarse en las oficinas de atención de público de la Isapre o en las entidades o instituciones recaudadoras autorizadas por ella.

Señala que en caso de no pago de la cotización pactada para salud, la Isapre deberá informar tal circunstancia al afiliado, sea cotizante dependiente, pensionado, independiente, voluntario o cesante, dentro de los tres meses siguientes contados desde



aquél en que no se haya pagado la cotización como se establece en el artículo 197 de esa normativa.

b.- El contrato de salud previsional en relación con el enriquecimiento sin causa. Situación del trabajador que carece de contrato de salud con ISAPRE y FONASA y del que ya ha contratado y pagado sus cotizaciones de salud.

Expresa que desde hace ya un tiempo, la Corte Suprema ha uniformado la jurisprudencia, al sostener que, dándose los supuestos legales, corresponde aplicar el Código del Trabajo al personal que presta servicios a honorarios, si la contratación se ha efectuado fuera del marco legal que autoriza la contratación a honorarios.

Alega que esta jurisprudencia, se encuentra en proceso de cambio en relación a la aplicación de la sanción de nulidad del despido a los contratos a honorarios celebrados por organismos públicos, ha planteado diversos problemas, ya que al declararse la existencia de la relación laboral y ser condenados al pago de las supuestas cotizaciones previsionales devengadas durante el tiempo en que el trabajador prestó servicios a honorarios, se ha debido desembolsar grandes sumas de dinero de las arcas fiscales para satisfacer estos pagos carentes de causa, ya que como señalamos anteriormente, se trataría de un pago doble y sin razón jurídica alguna debido a que el monto de tales cotizaciones estaría incluido en las remuneraciones íntegras ya pagadas al prestador de los servicios a honorarios, aun cuando no fueron retenidos por la Institución o Servicio contratante.

Sostiene que en relación con las cotizaciones de salud supuestamente adeudadas a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), se puede señalar que respecto al pago de ellas se dan los supuestos o requisitos del enriquecimiento sin causa:

a) Enriquecimiento de un sujeto: Indica que para estos efectos es toda ventaja patrimonial, provecho o beneficio adquirido. Agrega que concurre este requisito desde el momento que la ISAPRE recibe o recibiría lo correspondiente a las cotizaciones de salud por un periodo ya concluido sin que en consecuencia haya prestado o tenga posibilidades de prestar la contraprestación que le corresponde realizar por los pagos recibidos. (o bien recibe un doble pago en caso de que el prestador de servicios haya pagado dicha cotización en su oportunidad)

b) Empobrecimiento de otro: Se produce al tener que pagar el Fisco u organismo condenado por la sentencia.

c) Correlatividad entre ambos: este punto, o requisito del enriquecimiento sin causa, puede enunciarse también como la relación de causalidad entre el



empobrecimiento y el enriquecimiento, es decir, se trata de que el enriquecimiento se deba, fundamentalmente, al empobrecimiento de otro, o dicho a la inversa, que el empobrecimiento de uno se deba fundamentalmente, al enriquecimiento del otro. Añade que el enriquecimiento de la institución de salud se debe al empobrecimiento del Estado que es quien realiza el pago.

d) Ausencia de causa del enriquecimiento o carencia de causa: sobre este punto, señala el profesor Peñailillo, es necesario establecer que el enriquecimiento de uno a expensas del otro sea "sin causa" que lo justifique. Agrega que en rigor, todo hecho tiene una causa. Añade que de lo que se trata es exigir a todo enriquecimiento, o, más ampliamente, a toda atribución patrimonial, una causa jurídicamente, que en derecho sea aceptable.

Explica que entonces, no basta: ni un enriquecimiento de uno, por injustificado que sea, si no es a expensas de otro; ni un enriquecimiento a expensas de otro, si esa situación tiene una justificación o causa que lo explique y ante este punto de análisis, se presenta claramente el enriquecimiento injustificado o sin causa, debido a que:

A) "no hay de por medio un contrato de prestaciones existente entre la institución previsional de salud y el trabajador", razón por la cual no es sino hasta la declaración de la sentencia que establece la existencia del contrato de trabajo que surgirán derechos y obligaciones de él, una vez celebrado. Agrega que solo en ese momento el trabajador puede hacer exigible la prestación, objeto de la obligación, por parte de la institución de salud, es decir, aquello que se ha de dar, hacer o no hacer, prestación que consiste en atenciones médicas, exámenes de diagnóstico, procedimientos clínicos y/o terapéuticos, intervenciones quirúrgicas u otras, al tiempo del pago, las cuales no se realizaron ni era posible realizarlas ante la ausencia del contrato de salud.

B) Por otra parte, existe la posibilidad de que se haya cotizado de forma voluntaria por parte del trabajador, recibiendo el prestador un pago o doble pago por un servicio prestado, concluyendo así la existencia de un enriquecimiento injustificado al configurarse los presupuestos doctrinarios.

Alega que en síntesis, ordenado el pago retroactivo de cotizaciones de salud, existiría enriquecimiento ilícito, tanto cuando no hay contrato de salud anterior, por pagarse prestaciones de salud imposibles de otorgar, y cuando el trabajador tiene contrato, pues ese caso se pagaría doblemente a la institución de salud.

CUARTO: Que la demandante evacuando el traslado de la excepción de prescripción, señala que plantea el fisco de Chile que se aplicarían normas



excepcionales que están fijadas para ciertos casos que no se aplica en la especie, porque la norma aplicable a la materia dice que el plazo se cuenta desde la desvinculación y habiéndosele desvinculado hace unos meses atrás, se encuentra dentro de plazo.

QUINTO: Que con fecha 8 de noviembre de 2018 tuvo lugar la audiencia preparatoria, fijándose los siguientes hechos no controvertidos:

a) Que el demandante prestó servicios para la demandada desde el 01 de mayo de 2006 hasta el 19 de junio de 2018, en virtud de diversos contratos a honorarios.

b) Que desempeño las funciones en la subsecretaría de transportes del ministerio de transportes y telecomunicaciones.

c) Que su remuneración era asimilable al grado 4 escala única de sueldos.

Asimismo en ella el tribunal llamó a los litigantes a **conciliación**, proponiendo al efecto el Tribunal bases concretar de un posible acuerdo, el cual no prosperó.

Atendido lo precedentemente relatado y existiendo al juicio del tribunal hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijo los siguientes **hechos a probar**:

a) Existencia de relación laboral entre las partes.

b) Circunstancias que originaron el término de la relación. Si fuere de carácter laboral, cumplimiento de las formalidades legales para el empleador.

c) Funciones realizadas por el actor, jornada laboral si la hubiere, etc.

d) Efectividad que la demandada no haya pagado las remuneraciones de seguridad social del actor.

e) Efectividad de proceder la aplicación de la sanción establecida en el artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo en la especie.

f) Efectividad de proceder la indemnización por el pago de las cotizaciones de salud realizadas por el actor.

g) Efectividad de proceder feriado proporcional y monto del mismo.

SEXTO: Que para acreditar sus alegaciones la demandante incorporó al proceso los siguientes medios probatorios:

I.- Documental:

Incorporó los siguientes documentos en la audiencia de juicio, los que no fueron objetados de contrario y que consisten en:

1. Decreto Exento RA N° 288/586/2018, término anticipado.

2. Notificación de fecha 18 de junio del José Luis Domínguez a Ricardo Arqueros.



3. Certificado de Antigüedad N° 340, de fecha 17 de agosto de 2018, del Encargado Unidad de Gestión de Personal de la Subsecretaría de Transportes.

4. 128 copias de correos electrónicos que van desde el 21 de junio de 2006 hasta el 18 de junio de 2018 (los documentos son resumidos e iban del n°4 al 128 de la minuta de la demandante)

5. Acta de devolución de equipo computacional de fecha 19 de junio de 2018.

6. Tres copias de credenciales institucionales.

7. Copia de tres tarjetas de presentación institucionales, como Ingeniero de Transantiago, como coordinador de Unidad de Proyectos y como Gerente de Infraestructura.

8. Registro de liquidación de don Ricardo Arqueros emitida al Ministerio de Transportes de diciembre de 2015.

9. Registro de liquidación de don Ricardo Arqueros emitida al Ministerio de Transportes de diciembre de 2016.

10. Registro de liquidación de don Ricardo Arqueros emitida al Ministerio de Transportes de diciembre de 2017.

11. Registro de liquidación de don Ricardo Arqueros emitida al Ministerio de Transportes de junio de 2018.

12. Registro de asistencia de Reloj Control de don Ricardo Arqueros desde enero de 2017 hasta junio de 2018.

13. Licencia médica de 24 de junio de 2015, en favor de don Ricardo Arqueros, recepcionada y timbrada por DTPM.

14. Felicitaciones por cumpleaños de don Ricardo Arqueros, de 14 de enero de 2017, suscrito por Carlos Melo, Subsecretario de Transportes.

15. Felicitación al equipo de infraestructura, por proyecto Vicuña Mackenna, de Gloria Hutt y José Domínguez, Ministra y Subsecretario de Transportes, respectivamente.

16. Felicitación al equipo de infraestructura, por proyecto Rinconada de Maipú, de Gloria Hutt y José Domínguez, Ministra y Subsecretario de Transportes, respectivamente.

17. Noticia de prensa, Diario el Mercurio, de fecha 8 de octubre de 2018, en que el Director de DTPM señala que "uno de los objetivos es reducir los costos del sistema y que este genere mayores recursos que puedan ser reinvertidos en la infraestructura",



prueba que el desarrollo de infraestructura es labor permanente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

18. Certificado de capacitaciones de don Ricardo Arqueros, de 5 de julio de 2018.

II.- Testimonial:

Rindió la testifical de María Daniela Rubio Rubio, Hendrik Janz Muskus Muskus y Álvaro Jesús Velasco Espinosa, quienes legalmente juramentados y dando razón de sus dichos expusieron:

La primera que fueron compañeros de trabajo en el directorio de transporte público, ella ingreso en octubre de 2006, retirándose en octubre de 2018. Manifiesta que eran todos trabajadores formales, tenían un horario de trabajo, jefatura, vacaciones, trabajo común y corriente. Indica que el demandante tuvo como jefaturas a Raúl Barrientos, ella trabajaba en la coordinación de usuario, no trabajando en la misma área del actor. Sostiene que su otra jefa era Loreto y cuando ella se fue el actor llegó a ser jefe. Manifiesta que el actor recibía instrucciones, porque el área estaba organizada en gerencias y cada una tenía sus jefes. Expone que el actor se desempeñaba en el área de infraestructura, teniendo relación con las otras áreas. Señala que el director de transporte público, ve la operación de los buses, requiriéndose un soporte de infraestructura. Señala que ella se retiró antes de la desvinculación del actor, sabiendo lo que paso de oídas, pero el actor siempre fue bien evaluado, sorprendiendo su desvinculación, no existiendo razones técnicas. Agrega que el demandante empezó a tener más responsabilidades y personas a su cargo. Señala que tuvo a su cargo 20 personas, impartiendo órdenes. Contraexaminada señala que sabe que la infraestructura ha estado constantemente el directorio de transporte público, que regula el sistema de transporte público de buses. Añade que ella estaba en el área de usuarios. Manifiesta que el directorio forma parte de la subsecretaría.

El segundo que fue compañero de trabajo por 10 años con el actor, en el directorio, llegando en marzo de 2008 y retirándose en marzo de 2018. Sostiene que el actor formaba parte de la unidad de infraestructura, llegando a ser gerente del área. Manifiesta que el actor tenía tres jefes, Raúl Barrientos, Ingrid Low y Loreto Barrios, quedando luego él. Añade que la gerencia de infraestructura forma parte del programa de Transantiago. Explica que no formaban parte de la misma área, él era de usuarios, viendo el actor, estudios y proyectos. Señala que las funciones eran propias del área de infraestructura del Ministerio de Transportes. Indica que debían cumplir horario y



debían acogerse a lo que decían los jefes. Expone que supo de la desvinculación del actor. Añade que el actor tenía una buena evaluación, porque llegó a ser gerente del área, teniendo personal.

El tercero que lo que recuerda es que el actor llegó después de él, estando el desde antes, llegando como un ingeniero más, luego de que el partió del transantiago, supo que el actor llegó a ser gerente. Sabe que el área en el que trabajaba el actor tenía que ver con que el transantiago debía compartir con otros vehículos. Manifiesta que el actor tenía jefatura, horario de trabajo y vacaciones. Sostiene que sabe de la desvinculación del actor, porque él estaba vinculado con el área que se desempeñaba el demandante con el Mop. Sabe que el término de los servicios se produjo por la función del área. Señala que espera que las funciones sigan continuando. Contraexaminado señala que prestó servicios hasta julio de 2010. Interrogado por el tribunal señala que ingreso a prestar servicios para el Directorio desde el año 2004.

III.- Oficios:

La parte demandante requirió se oficiara a las instituciones y con el fin señalado en el acta audiencia preparatoria, lo que se cumplió incorporándose la información en ellos señalada.

IV.- Exhibición de documentos:

La parte demandante pidió además se exhibieran los siguientes documentos a saber:

1. Informes de gestión mensual y anual respecto de todo el periodo contratado, esto es del 1 de mayo de 2006, hasta la fecha de la desvinculación (no los presenta correlativamente).

2. Registros de ingreso y salida del demandante por el periodo demandado (lo hace respecto del 2017-2018).

3. Decretos que aprueban la Contratación a honorarios del demandante por el periodo laboral demandado.

4. Contratos a honorarios celebrados entre las partes correspondientes al periodo laboral demandado.

La parte demandante tiene por cumplida parcialmente, aquellos signados con el N° 1 y 2 y totalmente el resto.

SEPTIMO: Que a su turno la parte demandada rindió los siguientes medios de prueba, a saber:

I.- Documental:



Incorporó los siguientes documentos en la audiencia de juicio, los que no fueron objetados de contrario y que consisten en:

1. Decreto Exento N° 87, de 16 de mayo de 2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

2. Decreto N° 03, de 08 de enero de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

3. Decreto N° 155, de 31 de diciembre de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz

4. Decreto N° 115, de 04 de noviembre de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba modificación de contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

5. Decreto Exento N° 103, de 16 de enero de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz

6. Decreto Exento N° 153, de 19 de enero de 2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

7. Decreto Exento N° 156, de 18 de enero de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

8. Decreto Exento N° 1140, de 20 de mayo de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba modificación de contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

9. Decreto Exento N° 2353, de 30 de diciembre de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

10. Decreto Exento N° 149, de 17 de enero de 2013, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.



11. Decreto N° 13, de 30 de enero de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

12. Decreto Exento N° 812, de 30 de enero de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

13. Decreto N° 35, de 13 de enero de 2015, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

14. Decreto N° 156, de 08 de noviembre de 2016, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

15. Decreto TRA N°288/396/2016, de 25 de enero de 2016, de la Subsecretaría de Transportes, que aprueba contrato de honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

16. Decreto TRA N°288/266/2017, de 23 de enero de 2017, de la Subsecretaría de Transportes, que aprueba contrato de honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

17. Decreto TRA N°288/30/02017, de 15 de enero de 2018, de la Subsecretaría de Transportes, que aprueba contrato de honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz.

18. Decreto TRA N°288/586/2018, de 25 de junio de 2018, de la Subsecretaría de Transportes, que aprueba termino anticipado de convenio de honorarios a suma alzada suscrito con don Ricardo Arqueros Véliz

19. Se adjuntan copia de liquidaciones de honorarios de los meses comprendidos entre el periodo de enero de 2010 a junio de 2018.

20. Copia de notificación de 18 de junio de 2018, mediante la cual se comunica término de vínculo con el servicio.

21. Copia de comprobante de envío de notificación de término de vínculo con el servicio.

II.- Testimonial:

Rindió la testifical de Ximena Riquelme Lillo, quien legalmente juramentada expuso que es asesora en el Ministerio en el Directorio de Transporte Publico, desde marzo de 2018. Añade que conoce al demandante del Directorio, teniendo el actor un



cargo en el área de infraestructura. Señala que el sistema de transporte público urbano es un área en el cual operan públicos y privados, habiendo empresas privadas y el Ministerio. Añade que la principal función es proveer el sistema de transporte público en determinadas comunas. Señala que existe una relación con la Subsecretaria. Señala que desde el punto administrativo son un programa presupuestario, porque los diferentes ministerios presentan diferentes iniciativas para que se les provea presupuesto. Agrega que los Ministerios son permanentes en el tiempo. Expone que el Ministerio tiene dos subsecretarias, una de telecomunicaciones y otra de transportes y dentro de esta última, existen áreas permanente de trabajo y una de ellas es la Subsecretaria de Transportes y cuando se crea el sistema de transporte público, se requiere de apoyo para poder llevarlo a cabo y ahí lo que se hace es una solicitud de presupuesto para el funcionamiento. Añade que ellos año a año deben discutir el presupuesto. Añade que la ley de presupuesto dice que si no se aprueba la ley, la ley que se presentó en la Dipres es la que vale, pero políticamente pudiera decirse que constituyan un servicio público. Añade que no tienen un jefe de servicio. Refiere que todos los procesos y procedimientos brindan una asesoría a la subsecretaria, firmando las adquisiciones o cualquier cosa la subsecretaria. Añade que las funciones del directorio podrían ser desarrolladas por otro organismo, así por ejemplo si la intendencia pide hacerse cargo del programa, lo podrían traspasarlas a ellas o traspasarse recursos a otros servicios, por ejemplo el Serviu. Señala que el contexto del término de los servicios del actor fue una revisión de la estructura del Directorio, donde se toma la decisión de unir dos áreas de trabajo, por un tema de autonomía presupuestaria, pudiendo fundirse áreas que no forman parte del negocio, como infraestructura. Refiere que en la práctica la gerencia de planificación de transporte asume lo que veía infraestructura. Contraexaminada señala que el plan maestro de infraestructura está en la ley, pero los planes maestros no son mandantes, lo que no obliga a que la ley de presupuestos lo contemple. Agrega que quien designa los presupuestos es la Dipres, porque a ellos no se les puede reclamar la ejecución del plan maestro sin recursos. Refiere que los planes maestros no son vinculantes para presupuesto.

III.- Oficios:

La parte demandada requirió se oficiara a las instituciones y con el fin señalado en el acta audiencia preparatoria, lo que se cumplió incorporándose la información en ellos señalada.



I.- EN CUANTO A LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION:

OCTAVO: Que corresponde en primer lugar pronunciarse acerca de la excepción de prescripción opuesta.

NOVENO: Que al respecto la parte demandada opone excepción de prescripción extintiva de dos años prevista en el artículo 510 inciso primero del Código del Trabajo, respecto de la acción de declaración de la relación laboral, al haberse iniciado la prestación a honorarios en mayo de 2006, debiendo solicitarse la declaración antes referida en esa fecha o dentro de los dos años siguientes a su inicio, más aún cuando anualmente se suscribían nuevos contratos a honorarios, con funciones que no eran iguales a las de periodos anteriores.

DECIMO: Que evacuando el traslado que le fuera conferido, la parte demandante señala que plantea el fisco de Chile que se aplicarían normas excepcionales que están fijadas para ciertos casos que no se aplica en la especie, porque la norma aplicable a la materia dice que el plazo se cuenta desde la desvinculación y habiéndosele desvinculado hace unos meses atrás, se encuentra dentro de plazo.

UNDECIMO: Que conforme lo dispone el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, los derechos regidos por dicho cuerpo legal prescribirán en el plazo de dos años desde la fecha en que se hizo exigible.

DUODECIMO: Que conforme aparece de la demanda de autos, aquello que se pide por el actor es la declaración de una relación laboral de carácter continua entre el 1 de mayo de 2006 y 17 de julio de 2018, solicitándose en base a ello el pago de las indemnizaciones propias del despido que señala fue objeto, además del feriado proporcional debido y prestaciones reclamadas.

DECIMO TERCERO: Que atendido lo antes señalado, no es posible para esta juez, dar lugar a la prescripción opuesta, desde que lo solicitado, esto es la declaración de relación laboral continua, supone la existencia de tal estado en el tiempo, haciéndose exigible, una vez que la misma concluyó a saber el 17 de julio de 2018, no habiendo transcurrido entre esa fecha y la notificación de la demanda, los dos años reclamados, razón por la cual se rechazará la demanda en este capítulo.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

DECIMO CUARTO: Que conforme los hechos que se tuvieron por no controvertidos, resulta pacífico en juicio que el demandante ingresó a prestar servicios para la demandada el 1 de mayo de 2016 hasta el 19 de junio de 2018, en virtud de diversos contratos a honorarios, desempeñando sus funciones en la Subsecretaría de



Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que su remuneración era asimilable al grado 4 escala única de sueldos.

DECIMO QUINTO: Que luego resulta controvertido en este juicio la existencia de una relación laboral entre las partes; las circunstancias que originaron el término de la relación. Si fuere de carácter laboral, cumplimiento de las formalidades legales para el empleador; las funciones realizadas por el actor, jornada laboral si la hubiere, etc; la efectividad que la demandada no haya pagado las remuneraciones de seguridad social del actor, de proceder la aplicación de la sanción establecida en el artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo en la especie y la indemnización por el pago de las cotizaciones de salud realizadas por el actor.

DECIMO SEXTO: Que para acreditar sus dichos la parte demandante incorporó en la audiencia de juicio, Decreto Exento RA N° 228/586/2018, por medio de la cual se pone termino anticipado a la contrata del demandante, fundado en la circunstancia de que se encuentra en pleno desarrollo una política fiscal con acento en la austeridad del gasto público, lo que se traduce en la implementación de medidas al interior de cada servicio, de manera de limitar o restringir gastos en materia de personal, agregándose que producida la asunción del Subsecretario de Transportes, en marzo de 2018, se ha comenzado un proceso de optimización de los procesos internos, donde se incluye al Directorio de Transportes Metropolitano (DTPM), enmarcándose las necesidades del servicio se enmarcan, en una mayor eficiencia en los gastos en materia de personal que involucra un análisis crítico de la estructura, las funciones, los funcionarios y el personal contratado a honorarios en las diversas unidades, áreas y equipos de la estructura organizacional vigente, con propósito de cumplir con los principios de eficiencia y eficacia de la Administración del Estado y que en el marco de dicho proceso de optimización de los procesos internos de DTPM se observa que existen dos Gerencias abocadas a la Planificación y Desarrollo del Sistema de Transporte Público Metropolitano, siendo una de ellas la Gerencia de Planificación y Desarrollo y otra la de Infraestructura, de la que se encarga don Ricardo Arqueros Veliz en conformidad con las labores de su contrato. Agrega que considerando el análisis funcional y de eficiencia, señala el Director de Transporte Público Metropolitano, no hay necesidad de contar con dos gerencias que realicen trabajos similares o idénticos, ambas con roles de planificación de inversiones en infraestructura, concluyendo el informe en comento que el equipo de trabajo y las funciones relativas a planificación de inversión e infraestructura serán subsumidas por la Gerencia de Planificación y



Desarrollo, con lo cual implica reducir el número de personal vinculado a esta área que se fusiona, agregándose que las funciones estratégicas de don Ricardo Arqueros Veliz pasarán a ser asumidas por el Gerente de Planificación y las funciones operativas, serán reasignadas al interior del equipo, del modo que indica.

Que además agregó notificación de fecha 18 de junio de 2018, en el cual se le informa que se ha decidido poner término a su vinculación, requiriéndole que informe si hará uso del feriado, permisos con goce y horas compensadas, a lo que el demandante responde afirmativamente.

Que aparejó asimismo certificado N° 340 en el cual Rodrigo Toro Inarejo, encargado de Unidad de Administración de Personal, Subsecretaria de Transportes, indica que el demandante prestó servicios para dicha secretaria de estado entre el 1 de mayo de 2006 y 18 de junio de 2018.

Que también adicionó 128 correos electrónicos, que van desde el 21 de junio de 2006 a 18 de junio de 2018, que corresponden entre otros a requerimientos efectuados por Raúl Barrientos, Ingrid Loewe González, Loreto Wahr y Guillermo Muñoz, Jefes de Infraestructura Transantiago y otras personas al demandante y comunicaciones y requerimientos del actor a Raúl Barrientos, otras personas y entidades.

Que añadió además copias de credenciales, en las cuales sale el nombre del demandante, indicándose en la N° 99010011 Unidad de Infraestructura Coordinación Transantiago, en la N° 99010179 Coordinación Transantiago y en la tercera, sin número, Gerencia de Infraestructura, Directorio de Transporte Público Metropolitano y copias de tarjetas de presentación, en la cual el actor aparece en la primera como Ingeniero Área Infraestructura, en la segunda jefe Unidad de Proyectos y Obras, gerencia infraestructura y Gerente Infraestructura.

Que también agregó liquidaciones de sueldo de diciembre de 2015, 2016, 2017 y junio de 2018.

Que aparejó registro de asistencia del periodo que va de enero de 2017 a junio de 2018, comprobante de licencia médica electrónica de fecha 24 de junio de 2015, recepcionada por el Directorio de Transporte Publico Metropolitano, el 25 de junio de 2015.

Que además adicionó una carta de felicitación por cumpleaños, de fecha 14 de enero de 2017, de Carlos Melo Riquelme, Subsecretario de Transportes al demandante.

Que también agregó una publicación en la cual se destaca el trabajo del equipo de Directorio de Transporte Público Metropolitano, por parte de Gloria Hunt, Ministra



de Transporte y Telecomunicaciones y José Luis Domínguez, Subsecretario de Transportes, en el cual aparece una fotografía del equipo referido y entre ellos el demandante.

Que asimismo aparejó una publicación en la cual Gloria Huntt, Ministra de Transporte y Telecomunicaciones y José Luis Domínguez, Subsecretario de Transportes, dan gracias a los integrantes de Directorio de Transporte Público Metropolitano por el corredor Rinconada de Maipú.

Que además incorporó nota de prensa del diario El Mercurio, de fecha 8 de octubre de 2018, en el cual da cuenta de las novedades señaladas por el Director de Transporte Metropolitano.

Que agregó certificado de capacitación, que da cuenta que el demandante registro tres cursos, coaching ejecutivo, protocolo de riesgos psicosociales y excelencia en el liderazgo de equipos de trabajo.

Que mediante exhibición de documentos, agregó decretos y contratos a honorarios del actor según el siguiente detalle:

a) Decreto N° 87, de 16 de mayo de 2006, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, suscrito el 26 de abril de 2006, por medio del cual se le encomienda al actor el diseño físico y operativo de corredores de transporte público segregados, apoyo en la elaboración de aspectos normativos para el diseño de elementos de infraestructura de transporte público; diseño, planificación y supervisión de levantamiento de información en terreno; desarrollo, acondicionamiento y mantención de bases de datos y elaboración de términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al proyecto Transantiago, pagándosele una suma de \$11.925.000 en 8 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de mayo y 31 de diciembre de 2006, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, capacitación y hacer uso de licencias médicas.

b) Convenio referido en el punto anterior.

c) Decreto N° 03, de 8 de enero de 2007, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor el diseño físico y operativo de corredores de transporte público segregados, apoyo en la elaboración de aspectos normativos para el diseño de elementos de infraestructura de transporte público; diseño,



planificación y supervisión de levantamiento de información en terreno; desarrollo, acondicionamiento y mantención de bases de datos y elaboración de términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al proyecto Transantiago, pagándosele una suma de \$19.561.500 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2007, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, capacitación y hacer uso de licencias médicas.

d) Convenio de fecha 18 de diciembre de 2006, cuyo contenido es el antes referido.

e) Decreto N° 155, de 31 de enero de 2007, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor el diseño físico y operativo de corredores de transporte público segregados, apoyo en la elaboración de aspectos normativos para el diseño de elementos de infraestructura de transporte público; diseño, planificación y supervisión de levantamiento de información en terreno; desarrollo, acondicionamiento y mantención de bases de datos y elaboración de términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al proyecto Transantiago, pagándosele una suma de \$20.911.248 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2008, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, capacitación y hacer uso de licencias médicas.

f) Convenio de fecha 11 de diciembre de 2007, cuyo contenido es el antes referido.

g) Decreto N° 115, de 4 de noviembre de 2008, en el cual se modifica el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, con fecha 11 de diciembre de 2007, encomendándose al actor prestar servicios en el diseño físico y operativo de elementos de infraestructura, tales como, corredores segregados para buses, estaciones, intermodales y de trasbordo, como también en diseños específicos para el pago extravehicular en paraderos de alta demanda; abordar tareas en los ámbitos de la simulación y evaluación económica social de corredores de transporte público; elaborar aspectos normativos para el diseño de elementos de infraestructura de transporte público; diseño, planificación y supervisión



de levantamiento de información en terreno; desarrollo, acondicionamiento y mantención de bases de datos; elaboración de términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al proyecto Transantiago, pagándosele una suma de \$21.683.436 en 12 cuotas, de la forma que indica.

h) Convenio de fecha 22 de diciembre de 2008, cuyo contenido es el antes referido.

i) Decreto N° 103, de 16 de enero de 2009, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor el diseño físico y operativo de elementos de infraestructura, tales como, corredores segregados para buses, estaciones, intermodales y de trasbordo, como también en diseños específicos para el pago extravehicular en paraderos de alta demanda; abordar tareas en los ámbitos de la simulación y evaluación económica social de corredores de transporte público; elaborar aspectos normativos para el diseño de elementos de infraestructura de transporte público; diseño, planificación y supervisión de levantamiento de información en terreno; desarrollo, acondicionamiento y mantención de bases de datos; elaboración de términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al proyecto Transantiago, pagándosele una suma de \$25.680.000 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2009, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales de lunes a viernes, registrando su cumplimiento en el sistema de control previsto para ello y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, permisos por fallecimiento, capacitación y hacer uso de licencias médicas.

j) Convenio de fecha 29 de diciembre de 2008, cuyo contenido es el antes referido.

k) Decreto N° 153, de 19 de enero de 2010, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor el diseño físico y operativo de elementos de infraestructura, tales como, corredores segregados para buses, estaciones, intermodales y de trasbordo, como también en diseños específicos para el pago extravehicular en paraderos de alta demanda; abordar tareas en los ámbitos de la simulación y evaluación económica social de corredores de transporte público; elaborar



aspectos normativos para el diseño de elementos de infraestructura de transporte público; diseño, planificación y supervisión de levantamiento de información en terreno; desarrollo, acondicionamiento y mantención de bases de datos; elaboración de términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al proyecto Transantiago, pagándosele una suma de \$26.835.600 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2010, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales de lunes a viernes, registrando su cumplimiento en el sistema de control previsto para ello, deduciendo el tiempo no prestado servicios superior a una hora y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, permisos por fallecimiento, capacitación y hacer uso de licencias médicas, además de viático.

l) Convenio de fecha 28 de diciembre de 2009, cuyo contenido es el antes referido.

m) Decreto N° 156, de 18 de enero de 2011, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor prestar servicios en el Directorio de Transporte de Santiago, desarrollando las siguientes labores, prestar servicios en gestión de proyectos relacionados con infraestructura para Transantiago, tales como, corredores segregados para buses, estaciones intermodales y de trasbordo, como también en diseños específicos para el pago extra vehicular en paraderos de alta demanda; desarrollar anteproyectos de soluciones físicas y operacionales usando herramientas computacionales de Última generación y su validación en terreno; apoyar la elaboración de los aspectos normativos; diseño, planificación y supervisión de levantamiento de información; apoyar la supervisión de la mantención de bases de datos e información entregada a externos; elaborar los términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al Proyecto Transantiago; prestar apoyo en la asignación, coordinación, seguimiento y control de las tareas y proyectos asignados a su equipo de trabajo, como a la unidad; generar las respuestas a la documentación externa en forma oportuna y apoyar la coordinación y supervisión de los aspectos administrativos de las licitaciones de estudios de la unidad, pagándosele una suma de \$27.962.700 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales de lunes a viernes, registrando su cumplimiento en el



sistema de control previsto para ello, deduciendo el tiempo no prestado servicios superior a una hora y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, permisos por fallecimiento, capacitación y hacer uso de licencias médicas, además de viatico y acceso a seguro complementario de salud. Agrega el convenio que el actor deberá entregar un informe de las labores encomendadas, en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2011.

n) Convenio de fecha 27 de diciembre de 2010, cuyo contenido es el antes referido.

ñ) Decreto N° 1140, de 20 de mayo de 2011, en el cual se aprueba la modificación del contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, con fecha 27 de diciembre de 2010, agregándose como labores encomendadas la siguiente: El profesional para todos los aspectos legales tendrá la calidad de Agente Público, para integrar las Comisiones de Evaluación Propuestas y Comisiones de Contraparte Técnica para la ejecución de los servicios, estudios y proyectos licitados por esta Secretaría de Estado, cuando se le designe con este fin".

o) Convenio de fecha 31 de marzo de 2011, cuyo contenido es el antes referido.

p) Decreto N° 2353, de 30 de diciembre de 2011, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor prestar servicios en el Directorio de Transportes de Santiago, desarrollando las siguientes labores, prestar servicios de gestión de proyectos relacionados con infraestructura para Transantiago, tales como, corredores segregados para buses, estaciones intermodales y de trasbordo, como también en diseños específicos para el pago extra vehicular en paraderos de alta demanda; desarrollar anteproyectos de soluciones físicas y operacionales usando herramientas computacionales de última generación y su validación en terreno; apoyar la elaboración de los aspectos normativos; diseño, planificación y supervisión de levantamiento de información; apoyar la supervisión de la mantención de bases de datos e información entregada a externos; elaborar los términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al Proyecto Transantiago; prestar apoyo en la asignación, coordinación, seguimiento y control de las tareas y proyectos asignados a su equipo de trabajo, como a la unidad; generar las respuestas a la documentación externa en forma oportuna y apoyar la coordinación y supervisión de los aspectos administrativos de las licitaciones de estudios de la unidad, además de tener la calidad de Agente Público, para integrar las



Comisiones de Evaluación Propuestas y Comisiones de Contraparte Técnica para la ejecución de los servicios, estudios y proyectos licitados por esta Secretaría de Estado, cuando se le designe con este fin,, pagándosele una suma de \$29.360.832 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2012, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales de lunes a viernes, registrando su cumplimiento en el sistema de control previsto para ello, deduciendo el tiempo no prestado servicios superior a una hora y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, permisos por fallecimiento, permiso del artículo 2° de la Ley 19.920, capacitación y hacer uso de licencias médicas, además de viatico, acceso a seguro complementario de salud y permiso sin goce de remuneraciones. Agrega el convenio que el actor deberá entregar un informe de las labores encomendadas, en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2012.

q) Convenio de fecha 30 de diciembre de 2011, cuyo contenido es el antes referido.

r) Decreto N° 149, de 17 de enero de 2013, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor prestar servicios en la Gerencia de Infraestructura de Directorio de Transportes de Santiago, desarrollando las siguientes labores liderar los procesos de diseño y ejecución de las distintas iniciativas que se implementan, para mejorar el desempeño del sistema a través de un estándar de diseño; liderar procesos internos de aprendizaje y mejora continua; innovar en las soluciones, mejorando la integración modal y urbana de los proyectos; levantar iniciativas y validar proyectos con las distintas Gerencias de la Coordinación, así como con municipalidades y otros organismos técnicos sectoriales; diseñar considerando la sustentabilidad de la infraestructura; prestar servicios de gestión de proyectos relacionados con infraestructura para Transantiago, tales como, corredores segregados para buses, estaciones intermodales y de transbordo, como también en diseños específicos para el pago extra vehicular en paraderos de alta demanda; desarrollar anteproyectos de soluciones físicas y operacionales usando herramientas computacionales de última generación y su validación en terreno; apoyar la elaboración de los aspectos normativos, diseño, planificación y supervisión de levantamiento de información; apoyar la supervisión de la mantención de bases de datos e información entregada a externos; elaborar los términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al



Proyecto Transantiago; prestar apoyo en la asignación, coordinación seguimiento y control de las tareas y proyectos asignados a su equipo de trabajo, como a la Gerencia y a la Coordinación; generar las respuestas a la documentación externa en forma oportuna y apoyar la coordinación y supervisión de los aspectos administrativos de las licitaciones de estudios de la Gerencia, pagándosele una suma de \$33.911.760 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2013, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales de lunes a viernes, registrando su cumplimiento en el sistema de control previsto para ello, deduciendo el tiempo no prestado servicios superior a una hora y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, permisos por fallecimiento, permiso del artículo 2° de la Ley 19.920, capacitación y hacer uso de licencias médicas, además de viatico, acceso a seguro complementario de salud, permiso sin goce de remuneraciones, solicitar descuento de cotizaciones y convenios. Agrega el convenio que el actor deberá entregar un informe de las labores encomendadas, en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2013.

s) Decreto N° 13, de 30 de enero de 2014, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor prestar servicios en la Gerencia de Infraestructura de Directorio de Transportes de Santiago, desarrollando las siguientes labores diseñar y ejecutar procesos de diseñar e implementar iniciativas que sirvan al mejoramiento del Sistema de Transporte Publico Metropolitano; encargado de liderar los procesos internos que sirvan para la mejora continua de la Gerencia; mejorar la integración modal y urbana de los proyectos a través de propuestas innovadoras; apoyar el levantamiento de iniciativas, proyectos con los distintos actores que intervienen en el Sistema de Transporte Público; diseñar considerando la sustentabilidad de la infraestructura; prestar servicios de gestión de proyectos relacionados con infraestructura para Transantiago, tales como, corredores segregados para buses, estaciones intermodales y de transbordo, como también en diseños específicos para el pago extra vehicular en paraderos de alta demanda; desarrollar anteproyectos de soluciones físicas y operacionales usando herramientas computacionales de Ultima generación y su validación en terreno; apoyar la elaboración de los aspectos normativos: diseño, planificación y supervisión de levantamiento de información; apoyar la supervisión de la mantención de bases de datos e información entregada a externos; apoyar la confección de los términos de referencia y bases de licitaciones



correspondiente a estudios de prediseño e ingeniería de detalles; Elaborar los términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al Proyecto Transantiago; prestar apoyo en la asignación, coordinación, seguimiento y control de las tareas y proyectos asignados a su equipo de trabajo, como a la Gerencia y a la Coordinación; generar las respuestas a la documentación externa en forma oportuna y apoyar la coordinación y supervisión de los aspectos administrativos de las licitaciones de estudios de la Gerencia, teniendo la calidad de agente público, pagándosele una suma de \$35.088.075 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales de lunes a viernes, registrando su cumplimiento en el sistema de control previsto para ello, deduciendo el tiempo no prestado servicios superior a una hora y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, post natal parental, permisos por fallecimiento, permiso del artículo 2° de la Ley 19.920, capacitación y hacer uso de licencias médicas, además de viatico, acceso a seguro complementario de salud, permiso sin goce de remuneraciones. Agrega el convenio que el actor deberá entregar un informe de las labores encomendadas, en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2014.

t) Convenio de fecha 18 de diciembre de 2013, cuyo contenido es el antes referido.

u) Decreto N° 812, de 30 de enero de 2014, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor prestar servicios en la Gerencia de Infraestructura de Directorio de Transportes de Santiago, desarrollando las siguientes labores diseñar y ejecutar procesos de diseñar e implementar iniciativas que sirvan al mejoramiento del Sistema de Transporte Publico Metropolitano; encargado de liderar los procesos internos que sirvan para la mejora continua de la Gerencia; mejorar la integración modal y urbana de los proyectos a través de propuestas innovadoras; apoyar el levantamiento de iniciativas, proyectos con los distintos actores que intervienen en el Sistema de Transporte Público; diseñar considerando la sustentabilidad de la infraestructura; prestar servicios de gestión de proyectos relacionados con infraestructura para Transantiago, tales como, corredores segregados para buses, estaciones intermodales y de transbordo, como también en diseños específicos para el pago extra vehicular en paraderos de alta demanda; desarrollar anteproyectos de soluciones físicas y operacionales usando herramientas computacionales de última



generación y su validación en terreno; apoyar la elaboración de los aspectos normativos: diseño, planificación y supervisión de levantamiento de información; apoyar la supervisión de la mantención de bases de datos e información entregada a externos; apoyar la confección de los términos de referencia y bases de licitaciones correspondiente a estudios de prediseño e ingeniería de detalles; Elaborar los términos de referencia de estudios de prediseño e ingeniería de detalles y contraparte técnica de estudios específicos, todos relacionados al Proyecto Transantiago; prestar apoyo en la asignación, coordinación, seguimiento y control de las tareas y proyectos asignados a su equipo de trabajo, como a la Gerencia y a la Coordinación; generar las respuestas a la documentación externa en forma oportuna y apoyar la coordinación y supervisión de los aspectos administrativos de las licitaciones de estudios de la Gerencia, teniendo la calidad de agente público, pudiendo integrar comisiones de contraparte técnica para la supervisión de la ejecución de las contrataciones aprobadas por la Subsecretaría y comisiones de evaluación de ofertas, pagándosele una suma de 3.189.825, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de enero de 2014, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales de lunes a viernes, registrando su cumplimiento en el sistema de control previsto para ello, deduciendo el tiempo no prestado servicios superior a una hora y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, post natal parental, permisos por fallecimiento, permiso del artículo 2° de la Ley 19.920, capacitación y hacer uso de licencias médicas, además de viatico, acceso a seguro complementario de salud, permiso sin goce de remuneraciones. Agrega el convenio que el actor deberá entregar un informe de las labores encomendadas, en enero de 2014.

v) Decreto N° 35, de 13 de enero de 2015, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaría de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor prestar servicios en la Gerencia de Infraestructura de Directorio de Transportes de Santiago, desarrollando las siguientes labores desempeñar el rol de Encargado de Unidad de Proyectos de la Gerencia de Infraestructura, liderando y supervisando al equipo de trabajo a su cargo, y gestionando los recursos que le sean asignados; asumir la subrogancia de la Gerencia de Infraestructura, cada vez que sea requerido; representar al Gerente de Infraestructura cuando sea necesario; generar y mantener procedimientos e instructivos que promuevan un sistema de gestión de calidad y cumplimiento de normas, para los proyectos del Sistema de Transporte Público; garantizar la calidad del diseño de los proyectos de



infraestructura del Directorio de Transporte Público Metropolitano; coordinar acciones tendientes a lograr que los diseños de infraestructura del sistema, sean concertados con otras áreas de organización, con otras reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Transportes, con las municipalidades correspondientes y con otros organismos del Estado competentes en dicha materia; validar la factibilidad de los proyectos, desde la perspectiva del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y de la normativa vigente aplicable; velar por la inclusión urbana en los proyectos; dirigir y asesorar procesos internos, que promuevan el desarrollo e implementación de iniciativas que busquen un mejoramiento continuo de la Gerencia; fomentar la implementación de iniciativas y proyectos con los diversos actores que participan en el Sistema de Transporte Público; diseñar y planificar diversos proyectos, considerando necesariamente la viabilidad de la infraestructura; confeccionar y planificar, mediante la utilización de tecnología de última generación, anteproyectos de soluciones físicas y operacionales, y su validación en terreno; asesorar y elaborar los aspectos normativos de la Gerencia de Infraestructura. Del mismo modo, debe encargarse del diseño, planificación y supervisión del catastro de información; supervisar la protección de las bases de datos e información proporcionada a terceros; elaborar y asesorar la confección de los términos de referencia y bases de licitaciones, en cuanto se refieran a estudios de prediseño e ingeniería de detalles; apoyar y coordinar el reparto, seguimiento y control de las tareas y proyectos encomendados a su equipo de trabajo, así como a la Gerencia y a la Coordinación; responder de manera apropiada la documentación externa; asistir y supervisar la gestión de la Gerencia en todas las actividades que razonablemente se requiera, específicamente respecto a los aspectos administrativos de las licitaciones de estudios de la Gerencia; integrar Comisiones de Contraparte Técnica para la supervisión de la ejecución de las contrataciones aprobadas de la Subsecretaría de Transportes cuando se le designe con ese fin; integrar Comisiones de Evaluación de ofertas en los procesos de contratación sustanciados por la Subsecretaría de Transportes, siempre que sea designado mediante resolución fundada de la autoridad en los casos y condiciones indicados en el inciso 5° del artículo 37 del Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley de Compras, teniendo la calidad de agente público, pagándosele una suma de \$40.574.580 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales de lunes a viernes, registrando su cumplimiento en el sistema de control previsto para ello, deduciendo el tiempo no prestado servicios



superior a una hora y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, derecho de amamantamiento, post natal parental, permisos por fallecimiento, permiso del artículo 2° de la Ley 19.920, capacitación y hacer uso de licencias médicas, además de viatico, acceso a seguro complementario de salud, permiso sin goce de remuneraciones y por matrimonio. Agrega el convenio que el actor deberá entregar un informe de las labores encomendadas, en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015.

w) Convenio de fecha 10 de diciembre de 2014, cuyo contenido es el antes referido.

x) Decreto N° 288/396/2016, de 25 de enero de 2016, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor prestar servicios en el Directorio de Transportes de Santiago, desarrollando las siguientes labores encargado de Unidad de Proyectos de la Gerencia de Infraestructura, liderando y supervisando al equipo de trabajo a su cargo, y gestionando los recursos que le sean asignados; asumir la subrogancia de la Gerencia de Infraestructura, cada vez que sea requerido; representar al Gerente de Infraestructura cuando sea necesario; elaborar y conservar procedimientos e instructivos que promuevan un sistema de gestión de calidad y cumplimiento de normas, para los proyectos del Sistema de Transporte Público; garantizar la calidad del diseño de los proyectos de infraestructura del Directorio de Transporte Público Metropolitano; sincronizar operaciones tendientes a lograr que los diseños de infraestructura del sistema, sean concertados con otras áreas de organización, con otras reparticiones dependientes de la Subsecretaria de Transportes, con las municipalidades correspondientes y con otros organismos del Estado competentes en dicha materia; aprobar la viabilidad de los proyectos, desde la perspectiva del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y de la normativa vigente aplicable; instar por la inclusión urbana en los proyectos; administrar y asesorar procesos internos, que promuevan el desarrollo e implementación de iniciativas que busquen un mejoramiento continuo de la Gerencia; promover al ejecución de iniciativas y proyectos con los diversos actores que participan en el Sistema de Transporte Publico; participar en el diseño y planificación de diversos proyectos, considerando necesariamente la viabilidad de la infraestructura; elaborar y planificar, mediante la utilización de tecnología de última generación, anteproyectos de soluciones físicas y operacionales, y su validación en terreno; prestar asesoría y elaborar los aspectos normativos de la Gerencia de Infraestructura. Del mismo modo, debe



encargarse del diseño, planificación y supervisión del catastro de información; controlar la protección de las bases de datos e información proporcionada a terceros; confeccionar y asesorar la elaboración de los términos de referencia y bases de licitaciones, en cuanto se refieran a estudios de prediseño e ingeniería de detalles; participar en la coordinación del reparto, seguimiento y control de las tareas y proyectos encomendados a su equipo de trabajo, así como a la Gerencia y a la Coordinación; apoyar dando respuesta de manera apropiada la documentación externa; apoyar y controlar la gestión de la Gerencia en todas las actividades que razonablemente se requiera, específicamente respecto a los aspectos administrativos de las licitaciones de estudios de la Gerencia; integrar Comisiones de Contraparte Técnica para la supervisión de la ejecución de las contrataciones aprobadas de la Subsecretaría de Transportes cuando se le designe con ese fin; integrar Comisiones de Evaluación de ofertas en los procesos de contratación sustanciados por la Subsecretaría de Transportes, siempre que sea designado mediante resolución fundada de la autoridad en los casos y condiciones indicados en el inciso 5° del artículo 37 del Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley de Compras, teniendo la calidad de agente público, pagándosele una suma de \$41.791.812 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales según la naturaleza de los servicios y establezca el supervisor del contrato, registrando su cumplimiento en el sistema de control previsto para ello, deduciendo el tiempo no prestado servicios superior a una hora y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, derecho de amamantamiento, post natal parental, permisos por fallecimiento, permiso del artículo 2° de la Ley 19.920, capacitación y hacer uso de licencias médicas, además de viatico, acceso a seguro complementario de salud, permiso sin goce de remuneraciones y por matrimonio. Agrega el convenio que el actor deberá entregar un informe de las labores encomendadas, en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015.

y) Decreto N° 156, de 9 de noviembre de 2016, en el cual se aprueba la modificación al contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaria de Transportes, precedente, en cuanto al objeto y honorarios, señalando en el caso de la primera que al demandante se le encomienda prestar servicios en el Directorio de Transportes de Santiago, desarrollando las siguientes labores: Dirigir y coordinar la Gerencia de Infraestructura de la Secretaria Ejecutiva del Directorio de Transportes Público Metropolitano; confeccionar, apoyar, diseñar, proponer, gestionar



en lo pertinente, soluciones específicas, a las necesidades de infraestructura del Sistema de Transporte Público y sus usuarios y ejecutar las mismas dentro de la normativa imperante; coordinar, asesorar y participar en la planificación y priorización de proyectos de infraestructura que apoyaran la operación de los Servicios de Transporte Público gestionando su desarrollo, construcción y posterior puesta en marcha; proponer, promover e incentivar, teniendo presente la gestión y desarrollo de la infraestructura vial con que cuenta la ciudad, la integración de los servicios de transporte público con otros modos de transporte y asegurar una adecuada inserción urbana; liderar, coordinar y supervisar, proponiendo, desarrollando, gestionando y ejecutando (a través de los distintos órganos del Estado pertinentes) proyectos que permitan, en términos generales, un mejor funcionamiento del Sistema, la ejecución de los proyectos de infraestructura mayor del Sistema de Transportes para la ciudad de Santiago, con una mirada integral; analizar, evaluar, confeccionar, desarrollar, gestionar y ejecutar proyectos de obras de infraestructura menor; coordinar y supervisar el cumplimiento del Plan Maestro de Infraestructura, informando periódicamente de sus avances al Director de Transporte Público; confeccionar, proponer, asesorar e informar definiciones que digan relación con los estándares de calidad de la Infraestructura del Sistema de transporte de Santiago; supervisar los indicadores que se desarrollen para la funcionalidad de la infraestructura de acuerdo a las necesidades y objetivos planteados, desde el punto de vista operacional y de servicio al cliente, manteniendo la calidad de agente público y la integración de comisiones. En el caso de la segunda cláusula modificada, el honorario a pagar sería de \$46.261.208.

z) Convenio de fecha 26 de agosto de 2016, cuyo contenido es el antes referido.

a') Decreto N° 288/266/2017, de 23 de enero de 2017, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaría de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor prestar servicios en la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transportes de Santiago, desarrollando las siguientes labores, liderar y coordinar la Gerencia de Infraestructura de la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transportes Público Metropolitano; confeccionar, apoyar, diseñar, proponer, gestionar en lo pertinente, soluciones específicas, a las necesidades de infraestructura del Sistema de Transporte Público y sus usuarios y ejecutar las mismas dentro de la normativa vigente aplicable; coordinar, asesorar y participar en la planificación y priorización de proyectos de infraestructura que apoyaran la operación de los Servicios de Transporte Público gestionando su desarrollo, construcción y



posterior puesta en marcha; proponer, promover e incentivar, teniendo presente la gestión y desarrollo de la infraestructura vial con que cuenta la ciudad, la integración de los servicios de transporte público con otros modos de transporte y asegurar una adecuada inserción urbana; liderar, coordinar y supervigilar, proponiendo, desarrollando, gestionando y ejecutando (a través de los distintos órganos del Estado pertinentes) proyectos que permitan, en términos generales, un mejor funcionamiento del Sistema, la ejecución de los proyectos de infraestructura mayor del Sistema de Transportes para la ciudad de Santiago, con una mirada integral; analizar, evaluar, confeccionar, desarrollar, gestionar y ejecutar proyectos de obras de infraestructura menor; coordinar y supervisar el cumplimiento del Plan Maestro de Infraestructura, informando periódicamente de sus avances al Director de Transporte Público; confeccionar, proponer, asesorar e informar definiciones que digan relación con los estándares de calidad de la Infraestructura del Sistema de transporte de Santiago; supervisar los indicadores que se desarrollen para la funcionalidad de la infraestructura de acuerdo a las necesidades y objetivos planteados, desde el punto de vista operacional y de servicio al cliente integrar Comisiones de Contraparte Técnica para la supervisión de la ejecución de las contrataciones aprobadas de la Subsecretaría de Transportes cuando se le designe con ese fin; integrar Comisiones de Evaluación de ofertas en los procesos de contratación sustanciados por la Subsecretaría de Transportes, siempre que sea designado mediante resolución fundada de la autoridad en los casos y condiciones indicados en el inciso 5° del artículo 37 del Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley de Compras, teniendo la calidad de agente público, pagándosele una suma de \$55.693.600 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales según la naturaleza de los servicios y establezca el supervisor del contrato, registrando su cumplimiento en el sistema de control previsto para ello, deduciendo el tiempo no prestado servicios superior a una hora y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, derecho de amamantamiento, post natal parental, permisos por fallecimiento, permiso del artículo 2° de la Ley 19.920, capacitación y hacer uso de licencias médicas, además de viatico, acceso a seguro complementario de salud, permiso sin goce de remuneraciones y por matrimonio, autorizar descuentos y traslado. Agrega el convenio que el actor deberá entregar un informe de las labores encomendadas, en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2017.



b') Decreto N° 288/30/2018, de 15 de enero de 2018, en el cual se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada suscrito entre el demandante y la Subsecretaría de Transportes, por medio del cual se le encomienda al actor prestar servicios en la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transportes de Santiago, desarrollando las siguientes labores, asumir la coordinación general de la Gerencia de Infraestructura de la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transportes Público Metropolitano durante el año 2018, formando equipos de trabajo, asignándoles el estudio y gestión de proyectos de infraestructura vial para el transporte público de pasajeros del Sistema, supervisando y orientando su trabajo de acuerdo a los lineamientos y objetivos generales dispuestos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y/o la Secretaría Ejecutiva para la eficiente operación del Sistema; participar en el proceso de diseño, planificación, desarrollo y gestión de proyectos de infraestructura pública para el Transantiago, entregando su asesoría desde el punto de vista vial, financiero y constructivo; elaborar y entregar propuestas que comprendan la introducción o mejoramiento de paraderos, estaciones de transbordo, zonas pagas y corredores y otras obras de infraestructura menor; asumir una coordinación activa con otras entidades públicas con competencias en materia de transporte público de pasajeros e infraestructura pública, con el objetivo de que los proyectos encabezados por la Secretaría Ejecutiva del DTPM se incorporen e interactúen de forma armónica con aquellos desarrollados por esas entidades; encabezar, dentro del DTPM, el monitoreo del estado de ejecución de los proyectos y obras que forman parte del Plan Maestro de Infraestructura, generando reportes que den cuenta de su grado de cumplimiento durante el año 2018 y de potenciales inconvenientes para su desarrollo; conducir el trabajo de la Gerencia de Infraestructura relacionado con el diseño, aplicación y seguimiento de variables y niveles de calidad, cuantitativos y cualitativos, conforme a los cuales se mida y pondere el funcionamiento de la Infraestructura del Sistema de Transporte de Santiago en sus aspectos operacionales; entregar un informe de las labores encomendadas, previamente visado por el Supervisor del contrato, el cual debe ser presentado al Departamento de Desarrollo de Personas, la primera quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018; integrar Comisiones de Contraparte Técnica para la supervisión de la ejecución de las contrataciones aprobadas de la Subsecretaría de Transportes cuando se le designe con ese fin; integrar Comisiones de Evaluación de ofertas en los procesos de contratación sustanciados por la Subsecretaría de Transportes, siempre que sea designado mediante resolución fundada de la autoridad en los casos y condiciones indicados en el inciso 5°



del artículo 37 del Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley de Compras, teniendo la calidad de agente público, pagándosele una suma de \$57.085.940 en 12 cuotas, rigiendo dicho contrato entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, debiendo cumplir con una jornada de 44 horas semanales según la naturaleza de los servicios y establezca el supervisor del contrato, registrando su cumplimiento en el sistema de control previsto para ello, deduciendo el tiempo no prestado servicios superior a una hora y teniendo derecho a feriado anual, permiso con goce de remuneración, derecho paternal, derecho de amamantamiento, post natal parental, permisos por fallecimiento, permiso del artículo 2° de la Ley 19.920, capacitación y hacer uso de licencias médicas, además de viatico, acceso a seguro complementario de salud, permiso sin goce de remuneraciones y por matrimonio, autorizar descuentos y traslado. Agrega el convenio que el actor deberá entregar un informe de las labores encomendadas, en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018.

□Que también como exhibición de documentos, incorporó los registros de asistencia del demandante de los años 2017 y 2018 e informe de actividades de los años 2015, marzo, junio y diciembre de 2016, 2017 y marzo y junio de 2018.

Que además agregó respuesta a oficios dirigidos a Isapre Colmena y AFP Modelo, que dan cuenta del pago de las cotizaciones correspondientes desde octubre y mayo de 2006, por parte del actor y a AFC, que dan cuenta de su no entero.

Que finalmente rindió la testimonial de María Rubio Rubio, Hendrik Muskus Muskus y Alvaro Velasco Espinosa, quienes refirieron acerca de la prestación de servicios del demandante.

DECIMO SEPTIMO: Que por su parte la demandada incorporo en la audiencia de juicio los mismos decretos incorporados por la demandante en su exhibición, cuyo contenido es igual que los acompañados por la parte demandante, además del 288/586/2018, que pone termino al contrato a honorarios del demandante.

Que también aparejó notificación de fecha 18 de junio de 2018, en el cual se le informa que se ha decidido poner término a su vinculación, requiriéndole que informe si hará uso del feriado, permisos con goce y horas compensadas, a lo que el demandante responde afirmativamente.

Que asimismo incorporo comprobante de notificación de contrato a honorarios y liquidaciones de honorarios.



Que finalmente agrego la declaración de Ximena Riquelme Lillo, quien expuso principalmente acerca del presupuesto de la demandada y el término de los servicios del demandante.

DECIMO OCTAVO: Que la discusión de autos, radica en determina la naturaleza la relación existente entre el actor y la demandada de autos, toda vez que la primera indica que es de naturaleza laboral y el segundo una de carácter civil.

DECIMO NOVENO: Que para la resolución del punto antes referido, resulta útil tener presente lo señalado en los artículo 7 y 8 del Código del Trabajo, los que disponen en síntesis que el contrato de trabajo es una convención por la cual empleador y trabajador se obligan recíprocamente una a prestar servicios, bajo dependencia y subordinación y la otra a pagar por los mismos, debiendo presumirse la calidad de tal de toda labor que tenga esas características y por otra parte lo dispuesto en el artículo 3 letra a) y b) del cuerpo legal antes mencionado, el que señala que “empleador” es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo y “trabajador” es toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo.

VIGESIMO: Que asimismo debe tenerse en consideración uno de los principios que rigen nuestro derecho laboral, esto es el de primacía de la realidad en virtud del cual en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero (Américo Pla. Fundamentos de Derecho Laboral. Sergio Gamonal Contreras. Año 2008. Primera Edición. Página 120)

VIGESIMO PRIMERO: Que conforme a lo antes señalado, para determinar si estamos frente a una relación contractual de naturaleza laboral, más que basarse en aquello suscrito por las partes, debe estarse a la forma en la cual se desarrolló la misma durante su vigencia, específicamente en relación a la develación de antecedentes que denoten la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, los que según la jurisprudencia judicial y administrativa se demuestra en una serie de factores que pueden darse en mayor o menor medida, como obligación de asistencia del trabajador, continuidad de los servicios prestados en el lugar de la faena, cumplimiento de un horario de trabajo, obligación del trabajador de ceñirse a las instrucciones y a los controles establecidos por el empleador, obligación del trabajador de mantenerse a las



órdenes del empleador y de acatar y obedecer sus instrucciones, derecho del empleador a dirigir al trabajador indicándole la forma y oportunidad de la ejecución de sus labores y supervigilancia o fiscalización del empleador en el desarrollo de las funciones que corresponden de acuerdo a la naturaleza de los servicios prestados (Código del Trabajo comentado. René Moraga Peña. Primera Edición. Año 2009. Página 13), continuidad de los servicios en el tiempo, exclusividad, reconocimiento de descanso semanal y anual, periodicidad en el pago de remuneraciones etc.

VIGESIMO SEGUNDO: Que además debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 1° del Código del Trabajo el que dispone “*Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.*”

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.”

Que también debe tenerse a la vista, el artículo 11 de la Ley 18.834 el que dispone “*Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.*”

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

VIGESIMO TERCERO: Que los hechos que se tuvieron por no controvertidos y los medios de prueba rendidos en autos, a saber decretos, contratos y boletas a honorarios, es posible determinar que el actor fue contratado a honorarios desde el 1 de



mayo de 2006, suscribiéndose 15 convenios, con duración generalmente de un año, con excepción del primero, recibiendo mes a mes una contraprestación en dinero por sus actividades, la que era pactada en los mismos convenios.

VIGESIMO CUARTO: Que además de lo anterior, aparece de los decretos y convenios a honorarios, informes de cumplimiento, correos electrónicos y testimonial de autos, que la demandante se desempeñó en el Área de Infraestructura del Transantiago, luego Gerencia de Infraestructura de la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano, como profesional llegando a ser gerente de esta última, desarrollando así actividades ligadas a la infraestructura para el Transantiago y luego para el Sistema de Transporte Publico Metropolitano.

Que lo antes señalado es por cuanto, si bien en los contratos de honorarios incorporados no se puede leer el cargo o labor genérica, para la cual habría sido contratado en cada periodo, mencionándose sólo el objeto del mismo, el actor siempre realizó labores ligadas a la infraestructura del Transantiago y luego Sistema de Transporte Publico Metropolitano, ya sea en el diseño de elementos de instalaciones que fueran necesarias para el desarrollo del sistema de transporte público como en su establecimiento o en la supervisión y luego dirección de los equipos que desarrollaban tales tareas, por cuanto así aparece de los propios convenios, informes de cumplimiento y correos electrónicos incorporados por la parte demandante, lo que fue corroborado por los testigos de la parte demandante.

Que de esta forma, de los correos electrónicos incorporados en la audiencia de juicio, se establece que el área de infraestructura veía el diseño, planificación y desarrollo de todos los servicios del Sistema de Transporte Publico Metropolitano, a saber, buses, metro, corredores, paraderos, vías etc y su coordinación con distintas entidades, además de la obtención de presupuesto para los mismos.

VIGESIMO QUINTO: Que además de lo anterior, se probó en el proceso que el actor a la fecha de término de la relación contractual, tenía derecho a feriado legal, permiso con y sin goce de remuneraciones, derecho paternal, amamantamiento, post natal parental, permiso por fallecimiento y matrimonio, reposo por incapacidad laboral, capacitación, seguro complementario de salud y derecho a viatico.

Que tales derechos, si bien no fueron en su totalidad conferidos al inicio de la prestación de servicios, se fueron incorporando paulatinamente, teniendo a la fecha de



conclusión de aquella, todas las prerrogativas señaladas, agregándose en el intermedio otros que fueron eliminados.

VIGESIMO SEXTO: Que por otra parte se lee de los contrato e informe de asistencia mensual, además de la testimonial la existencia de una jornada titulada como laboral, de 44 horas semanales, la cual se registraba al igual que el restante personal, presentando un horario entre las 08:26 y 09:17 horas hasta las 17:30 a 22:51 horas aproximadamente.

VIGESIMO SEPTIMO: Que finalmente, de la testimonial y correos electrónicos, aparece que el demandante tuvo jefatura, a saber Raúl Barrientos, Ingrid Loewe Gonzalez, Loreto Wahr y Guillermo Muñoz Senda, de quienes recibía instrucciones, tal como dan cuenta los numerosos correos electrónicos incorporados en la audiencia de juicio por la parte demandada, poniendo sólo como ejemplo el de 21 de junio de 2006, 8 de agosto de 2006, 15 de febrero de 2007, 12 de septiembre de 2007, 21 de noviembre de 2007, 21 de noviembre de 2008, 24 de marzo de 2009, 14 de octubre de 2009, 12 de enero de 2010, 26 de mayo de 2010, 18 de abril de 2011, 18 de enero de 2012, 3 de abril de 2013, 26 de mayo de 2014, 20 de septiembre de 2016, 9 de noviembre de 2016, 16 de junio de 2017, 6 de noviembre de 2017 y 5 de enero de 2018, en todos los cuales se entregan ordenes al demandante, en general en cuanto entrega de información, en algunos casos bajo plazo.

VIGESIMO OCTAVO: Que habiéndose establecido los hechos que se pueden acreditar del proceso, corresponde determinar si la relación habida entre las partes se encuadró o no en el artículo 11° de la Ley 18.834, a saber si las actividades del demandante correspondían a labores accidentales o cometidos específicos.

VIGESIMO NOVENO: Que atendido los medios de prueba rendidos en autos y conforme los hechos que se tuvieron por establecidos, no es posible determinar que las actividades para las cuales fuera contratado el demandante sean de naturaleza accidental o correspondan cometidos específicos, toda vez que se desarrollaron continuamente por el lapso de 12 años, ejecutando las mismas actividades, no circunscritas ni a un plazo o condición determinada, tal como ocurre con aquellas ligadas a la infraestructura del Sistema de Transporte Público Metropolitano, referidas como se dijo tanto a los servicios en sí mismos, apareciendo en los propios contratos a honorarios que las actividades desarrolladas estaban contempladas en los fondos puestos a disposición para el cumplimiento de funciones relacionadas con el plan de transporte



urbano de la ciudad de Santiago y luego con el Directorio de Transporte Publico Metropolitano.

Que en cuanto a la alegación de la demandada, en orden a que el actor prestó servicios para un programa especial de la subsecretaria, cabe señalar en primer lugar, que no se indica cual sería aquel programa especial, como tampoco aparece claramente establecido en los convenios a honorarios, sólo pudiendo desprenderse de los mismos que debiera ser el Plan de Transporte Urbano de la ciudad de Santiago y luego el Directorio de Transporte Publico Metropolitano, los que debido al tiempo que lleva desarrollándose y a la necesidad que se puede vislumbrar de mantener el mismo en el tiempo, no puede entenderse que las actividades del demandante lo fueran por cometidos específicos, ya que permanentemente se desarrollan y se requerirán, actividades orientadas a organizar el sistema de transporte de esta ciudad e implementar soluciones para su desarrollo, lo que se corrobora de la mantención de tales actividades pero desarrollándose por un área diferente.

Que respecto a lo señalado por la deponente de la demandada, en orden a que desde el punto administrativo el sistema de transporte público urbano es un programa presupuestario, debe indicarse que ello no modifica el hecho de que el mismo se haya mantenido en el tiempo, no correspondiendo a una actividad circunstancial.

TRIGESIMO: Que sin perjuicio de lo ya dicho, aparece además la existencia de indicios de laboralidad, como serían la continuidad de los servicios por 12 años, el otorgamiento de feriado legal, permisos con o sin derecho a remuneración, derecho a hacer uso de licencias médicas, la entrega de órdenes e instrucciones por parte de la jefatura directa, derecho a capacitación, que denotan que más que estar frente a una relación de carácter civil, se está frente a un vínculo de naturaleza laboral.

TRIGESIMO PRIMERO: Que habiéndose emitido pronunciamiento respecto de la existencia de una relación laboral, determinándola, corresponde resolver acerca del despido reclamado por el demandante.

TRIGESIMO SEGUNDO: Que atendida los hechos que se tuvieron por pacíficos además de la carta y decreto incorporadas en la audiencia de juicio por las partes, como la testimonial de la demandada, se determina que la relación existente entre las partes concluyó el 19 de junio de 2018, emitiendo la demandada un decreto y entregándose al demandante una carta que da cuenta de aquello.



TRIGESIMO TERCERO: Que encontrándose establecida la existencia de una relación laboral, la época y forma de conclusión de la misma y no cumpliendo aquella con el estándar requerido por el artículo 162 del Código del Trabajo, al no mencionar el antecedente de hecho y derecho que fundamentan la conclusión del vínculo laboral, se concluye que el despido que fue objeto el demandante es injustificado.

TRIGESIMO CUARTO: Que, habiéndose declarado injustificado el despido de que fue objeto el actor y conforme lo dispone el artículo 168 inciso penúltimo del Código del Trabajo, se establecerá que el término de la relación que unió a las partes se produjo por necesidades de la empresa con fecha 19 de junio de 2018, teniendo además derecho el trabajador a las prestaciones contenidas en el artículo 162 y 168 del mismo cuerpo legal.

□ **TRIGESIMO QUINTO:** Que, atendido el mérito de lo señalado en los considerandos precedentes, se acogerá lo solicitado por la demandante, en lo referente a la indemnización contemplada en el inciso cuarto del artículo 162, esto es la indemnización sustitutiva del aviso previo, teniendo para ello como valor de su última remuneración la suma de \$2.437.020, atendido el límite legal establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo, por ser el monto de la remuneración de mayo de 2018, el de \$4.752.720.

TRIGESIMO SEXTO: Que, de la misma forma, se dará lugar a lo solicitado por la demandante en cuanto se le concede el pago de la indemnización por años de servicio en su máximo legal, esto es 11 años de servicio, toda vez que de acuerdo a los hechos que se tuvieron por acreditados, el actor comenzó a prestar servicios para la demandada 1 de mayo de 2006 y se puso fin a la relación laboral el 19 de junio de 2018.

Que, siendo la última remuneración percibida por el trabajador ascendente a \$2.437.020 y habiendo prestado servicios el actor a la demandada por el lapso de 12 años, entre las fechas indicadas precedentemente, la suma debida por este concepto asciende a la suma de \$26.807.220, la cual se aumentará en un 50% conforme lo dispone el inciso primero del artículo 168 letra b) del Código antes indicado, ascendente a \$13.403.610.

TRIGESIMO SEPTIMO: Que en relación al feriado proporcional, no habiéndose acreditado su pago se dará lugar a ello.

TRIGESIMO OCTAVO: Que en relación a la acción de nulidad de despido, resultando claro que la demandada no retuvo ni entero cotizaciones de seguridad social



a favor de la actora y siendo la sanción establecida por el inciso 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, establecida para quien retiene y no entera tales sumas de dinero, se rechazará la demanda a su respecto.

TRIGESIMO NOVENO: Que sin embargo, se acogerá el libelo en relación al pago de las cotizaciones previsionales derivadas del contrato de trabajo, las que se realizaran conforme los montos mensuales líquidos, establecidos en las liquidaciones de honorarios, sin perjuicio del tope legal en el caso que corresponda.

Que respecto a la alegación de la demandada en orden a la improcedencia del pago de dichas cotizaciones, por existir enriquecimiento sin causa, indicando que dichas sumas se encuentran ya pagadas e incluidas en la remuneración pagada por los servicios prestados, cabe señalar que no aparecen antecedentes en juicio que hagan presumir que en los dineros pagados al actor se hayan considerado montos por concepto de cotizaciones previsionales, toda vez que se pactó una suma de dinero única y total por la prestación de servicios.

Que sin perjuicio de lo ya dicho, no podría haber un enriquecimiento injusto, desde que el demandante para asegurarse su subsistencia una vez que deje de prestar servicios por su edad, dedujo de su patrimonio las cotizaciones previsionales, por lo que el pago de estas por la demandada, sólo hace acrecentar sus fondos para la pensión de vejez, siendo ambas sumas de dinero del actor, una por ahorro y otra por aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley 17.322, parte final que indica que si se hubiere omitido practicar los descuentos previsionales será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden.

CUADRAGESIMO: Que en cuanto a lo solicitado en orden al pago de los dineros que enteró por concepto de cotizaciones de salud, debe indicarse que como ya se dijo serán de cargo del empleador el pago de las cotizaciones, respecto de las cuales no se hubiera efectuado el descuento, pero no así el pago de los dineros que gastó el trabajador en el pago de aquellas, por cuanto este voluntariamente decidió realizar aquello, con el objeto de obtener mejores prestaciones de salud, lo que podría no haber efectuado.

CUADRAGESIMO PRIMERO: Que los demás medios de prueba, en nada modifican lo resuelto por lo que se omitirá un análisis pormenorizado de los mismos.

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 66 y siguientes, 420 y siguientes, 446 y siguientes, 485 y siguientes del Código del Trabajo, Ley 18.883, **SE DECLARA:**



I.- Que **SE RECHAZA** la excepción de prescripción interpuesta por el **FISCO DE CHILE** en contra de **RICARDO ARQUEROS VELIZ**, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

III.- Que **SE ACOGE** la demanda de nulidad de despido, despido injustificado y cobro de indemnizaciones interpuesta en autos por **RICARDO ARQUEROS VELIZ** en contra del **FISCO DE CHILE**, sólo en cuanto:

a) se declara injustificado el despido que fue objeto el actor.

b) se declara que el término de los servicios del actor se produjo por necesidades de la empresa, con fecha 19 de junio de 2018.

c) la demandada deberá pagar la suma de \$2.437.020 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

d) la demandada deberá pagar la suma de \$26.807.220, por concepto de indemnización por años de servicio, aumentada en un 50% conforme lo dispone el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, ascendente a \$13.403.610.

e) que la demandada deberá pagar la suma de \$396.000 por concepto de feriado proporcional.

f) que la demandada deberá enterar las cotizaciones previsionales por todo el periodo trabajado, de conformidad al motivo trigésimo noveno de este fallo.

g) que todas las sumas señaladas deberá pagarse con los intereses y reajustes señalados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

IV.- Que **SE RECHAZA** la demanda de autos, en relación a la acción de nulidad de despido y pago de sumas pagadas por cotizaciones de salud

V.- Que **NO SE CONDENA** en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

Ejecutoriada la presente sentencia definitiva, hágase devolución de los documentos guardados en custodia.

Regístrese y archívese en su oportunidad, quedando las partes notificadas personalmente en esta audiencia.

□ **RIT: O-5894-2018**

□ **RUC: 18-4-0130393-2**



Dictada por doña **ANGELICA PEREZ CASTRO**, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

